Análisis del Año, núm. 9, 2007, pp. 33-72.

¿Qué hay detrás del malestar con la educación?.

Ruiz Encina, Carlos.

Cita: Ruiz Encina, Carlos (2007). ¿Qué hay detrás del malestar con la educación?. *Análisis del Año,* (9) 33-72.

Dirección estable: **http://www.aacademica.org/httpwww.nodoxxi.cl/8**

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. *Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: http://www.aacademica.org.*

¿Qué hay detrás del malestar con la educación?

Carlos Ruiz E.

La mayor sacudida al exitoso "modelo chileno"

Luego del año 2006 parece no haber idea que despierte mayor consenso en la sociedad chilena que aquella que reza que la educación está en crisis. Quedó rotundamente claro que el sistema educacional necesita una profunda revisión, pues el país no resiste mucho más con una educación tan desigual y segmentada.

La educación chilena es una donde las escuelas abocadas a la enseñanza básica y media no representan la antesala de la sociedad, ni el espacio de preparación para una dinámica social en la que impera el libre juego de talentos y capacidades, menos aún cunas de un futuro mejor, semilleros o incubadoras de tiempos más plenos, sino más bien unos lugares que definen estatus, que distribuyen posiciones en la jerarquía social, que indican quién vale más –y quien menos- como persona, y lugares que, por lo mismo, protegen y reproducen a los grupos que monopolizan el prestigio social, evitando el ingreso de aquellos individuos que no están convidados a integrarlos. En fin, una educación para la desigualdad, para la segmentación, para la diferenciación social, no para el ascenso, la igualdad de oportunidades, para la movilidad social, como reza la promesa liberal.

Como ocurre desde que se inició el reinado de la hoy vapuleada Ley Orgánica Constitucional para la Educación (LOCE), en Chile el derecho a la educación está subordinado a la "libertad de enseñanza", lo que provoca situaciones como las apuntadas. Puesto que es moda recurrir a referencias externas, a guisa de revestir de autoridad las propuestas para nuestra criolla realidad, valga considerar que en otros países los padres pueden elegir el colegio de sus hijos, pero el colegio no puede elegir a sus alumnos. En Chile, en cambio, en nombre de la "libertad de enseñanza" y la consiguiente ausencia de regulaciones establecida por la LOCE, esto sí se puede dar y un colegio puede cancelar la matrícula de sus alumnos con calificaciones inferiores a cierta meta, y así lograr una mejoría en las mediciones de calidad establecidas

(Simce), cuya incidencia en la competencia por la captación de matrícula y el prestigio de los establecimientos educativos es sabida de sobra.

El conflicto protagonizado por los estudiantes secundarios parece haberlo revuelto todo. Obviamente toca a la educación, pero también sacude las lógicas conocidas de constitución de actores sociales, su fisonomía, sus patrones de acción y de discurso, los rasgos de los liderazgos reconocidos en la sociedad. No menos sacudió también a la esfera política, a los partidos y las formas de representación y su supuesta efectividad, a la machacada pasividad de la ciudadanía, los modos e instrumentos de acción del gobierno y, de modo general, a la política social del Estado como tal. Más aún, la movilización estudiantil y el inédito grado de apoyo que alcanza en la población, replantea el problema de un malestar asociado a la frustración de las expectativas de ascenso social que se vinculan en forma extendida con la educación.

Tamaña sacudida puso en entredicho, nada más y nada menos, que a una ley orgánica constitucional. Una de esas que, como su nombre lo indica, no es una ley común sino uno de los basamentos orgánicos de la Constitución de 1980, y como tal un pilar del modelo económico, político y social heredado. Ninguna reforma hasta ahora esbozada en la arena política democrática, ha amagado con tocar dichos pilares orgánicos. No en balde exige más alto quórum parlamentario que cualquier otra ley para ser alterada. Ni siquiera hicieron tal las reformas que el presidente Lagos presentó pomposamente como una nueva Constitución (se recordará la ceremonia en que cambia la rúbrica de Pinochet por la suya en la "nueva" Carta Magna).

En suma, la movilización de los "'pingüino"s" estuvo a punto de desatar un terremoto constitucional superlativo. No suena exagerado esto, si se considera que el modelo de educación vigente está estrechamente ligado al modelo de desarrollo imperante; de ahí que los problemas del primero remitan a los dilemas y limitaciones que impone el segundo. El amplio e inédito consenso social, tras la demanda por la derogación de la LOCE, deviene problema político superlativo para el atribulado gobierno de turno de la Concertación, puesto que toca uno de los pilares del orden constitucional heredado. De tal modo, cuando dicho gobierno anuncia que la LOCE no se deroga, que a lo más se reforma, termina por cerrar filas detrás de la Constitución de 1980, mostrando a las claras que, si ésta no se ha cambiado antes, no es por la falta de consensos ciudadanos suficientes, sino porque se carece de la voluntad para hacerlo, lo que sólo puede responder al hecho de que la Concertación se acomodó de buen gusto al orden de cosas que dicha Carta Magna, de origen autoritario, prescribe.

La intensidad de un conflicto social no está asociada, como se cree muchas veces, a su drasticidad, a la violencia desplegada, sino a la medida en que involucra otras relaciones sociales, otros ámbitos de la existencia de una sociedad. El conflicto que los estudiantes secundarios plantearon en torno a la educación, sigue precisamente

ese curso: lejos de reducirse a una discusión técnica y corporativa de demandas particulares, constreñidas a los intereses de un sector específico de la sociedad, a medida que su lucha gana legitimidad, involucra otras problemáticas hasta devenir manifestación de una serie más amplia de malestares que no encuentran otras vías de expresión.

De modo que, alrededor de este proceso, se trenzan al menos tres fenómenos que es menester considerar en su propio mérito. El primero -y más visible de éstos- es la emergencia del movimiento de los estudiantes secundarios, con sus llamativos y novedosos rasgos, su sorprendente capacidad, su inédita amplitud social y marcado desapego a las identidades políticas más conocidas. En segundo lugar, a menudo soslayado, está el apoyo generalizado que alcanza dicho movimiento, no sólo en los sectores populares, quienes de forma más regular se lo han entregado, sino también en amplios sectores medios, en donde estos últimos, añaden una expresión de malestar, haciendo patente los vacíos de representación que la ensimismada esfera de la política acarrea consigo. En tercer lugar, el problema mismo de la educación y la medida en que, a partir de los patrones culturales vigentes y las expectativas asociadas a ellos, se vincula con el magro panorama que muestran ciertos rasgos de la sociedad chilena, como aquellos asociados a las rigideces que limitan la movilidad y el ascenso social, la primacía de un auténtico régimen meritocrático y, en definitiva, la frustración que se produce –tanto en sectores populares como medios, con su respectiva especificidad- en términos de la relación entre educación y posibilidades de ascenso social. Claro, aparte de lo anotado, también la movilización "pingüina" ha llamado indirectamente la atención sobre otras cuestiones, como los grados reales de representación de la política formal, el carácter y alcance efectivo de las políticas sociales del Estado, el malestar de importantes sectores medios, en particular con los mecanismos a través de los cuales la elite impide el ascenso social de estos sectores.

La atractiva novedad del movimiento de los "pingüinos"

La llamada generación "pingüina" acabó de un plumazo con una serie de mitos que parecían inamovibles. Desplomó la repetida idea de que la juventud formada en estos años, de supuesto imperio de una cultura posmoderna, resultaba intrínsecamente desinteresada en la "cosa pública", eminentemente enajenada detrás del carrete, el consumo y la satisfacción individual, inalterablemente presa de la pasividad del "no estoy ni ahí". Empero, no sólo se tomó las calles y liceos, sino que terminó por secuestrar la mismísima agenda política del país. Más consistente que el "momento Tunick" que hace un par de años se empleó para ilustrar el mentado cambio cultural de la sociedad, el momento "pingüino" –que sustituye el desnudo por el uniforme escolar- descoloca las repetidas interpretaciones sobre una extendida satisfacción social con el consumo. En lugar de ello, irrumpen de un modo sorpresivo

para el discurso en boga, unos escolares organizados, provistos de metas y estrategias claras, que parten pidiendo un carnet gratis y terminan exigiendo, con argumentos, escribir las leyes que reformen la educación pública chilena.

También se suponía que, dados los modos culturales de apropiación, la tecnología había devenido en un mero medio de enajenación, especialmente en estas franjas etáreas, a menudo apuntadas como el ejemplo más claro de semejante fenómeno. Pero esa misma tecnología que muchas veces no parece sino un fin en sí misma, para estos jóvenes resultó simplemente una forma de relacionarse con el colectivo, marcando notoriamente la organización del movimiento con celulares, mensajes de texto, blogs y páginas web. Aún así, ingenuamente, la materia de tales comunicaciones se sobreentendía constreñida a asuntos banales. Es irónico, por ejemplo, que durante el año 2005 una de las mayores preocupaciones del entonces Ministro de Educación, radicaba en la reticencia de los jóvenes a inscribirse en los registros electorales, lo que se explicaba por la mala "educación cívica" que recibían. De allí que, siguiendo una pauta habitual, el gobierno convocara a "expertos" a integrar una "comisión" para que lo asesorara en estas materias. Tal imaginativa comisión confirmó, que los estudiantes chilenos tenían una pésima educación cívica. Y como original solución, propuso una batería de medidas para enseñarles nuestro sistema institucional y motivarlos a mirar más allá de lo que suponía eran sus pequeños intereses (por supuesto que, de ningún modo, se considera que es la política lo que hay que cambiar). Pero, antes de que se pudieran implementar tales recomendaciones, aguadora pues, estalló la paciencia adolescente.

Es por ello que, por sobre otros rasgos, llamará poderosamente la atención de la sociedad, la medida en que la generación "pingüina" aparece conectada al interés colectivo. Al contrario de lo que sugieren los reiterados enfoques dedicados a exaltar la capacidad estructurante del consumo y la expansión irrefrenable del individualismo, estos jóvenes ponen de manifiesto que los procesos de conformación de identidad, no se reducen a la resolución de cuestiones referidas al destino personal, sino comprenden el hecho de asumir un punto de vista sobre el entorno, sobre el medio, la sociedad en que se vive. Se desploma así, toda una propalada argumentación –valga recordarla aunque sea para apreciar lo extemporánea que resulta ahora- acerca del sometimiento inevitable de estos jóvenes –especialmente ellos, se decía- a la ansiedad consumista, a la asociación del prestigio y la autoestima con dicho consumo, a la medida en que esa alienación constituía un efectivo mecanismo de domesticación, un cepo, un eficaz dispositivo de dominación, gracias a su intrínseca conexión con el placer, la satisfacción y la expectativa de realización del deseo. Toda una formulación acerca de la medida en que, en la actual "cultura posmoderna", la identidad del Yo se construye a través de los objetos, una suerte de "decorado del Yo" asociado a ellos, que da cuenta de un estatus, confundiéndose en definitiva, con los atributos del Yo: el consumo como deseo-placer y como construcción de sí mismo. El consumo,

como fuente fundamental de realización humana, capaz de moldear una forma pasiva de relación entre el mundo y la vida, cuyo desideratum resulta ser un individuo espectador y no un actor de los acontecimientos, arrastrándolo inexorablemente al encierro en el mundo privado, de un modo completamente incapaz de advertir cómo se manifiestan en la vida cotidiana los modos vigentes del poder. En definitiva, un proceso de privatización que restringe drásticamente el campo de la experiencia social; situación ésta en que lo que se extiende es más bien un deseo ansioso de "normalidad" en la que, incluso quienes anhelan una ampliación democrática subordinan el cambio a la mantención de esa normalidad, por precaria e ilusoria que sea; en que la gente prefiere no saber nada de nada, pues toda información incrementa la imprevisibilidad y, por ende, la incertidumbre; una suerte de "impermeabilización" mediante la cual la gente pone a seco su vida interior, protegiéndola del mundo externo. Huelga mayor comentario después de los hechos del 2006, a menos que pueda creerse posible la repentina y radical transformación, de una condición de personas ausentes a líderes sociales en posesión de un discurso articulado.

Se ha dicho también que son "hijos de la democracia". Nacidos entre 1989 y 1990, no conocieron la dictadura ni heredaron el temor a las movilizaciones sociales. Acaso por ello, han crecido con mayor determinación a exigir sus derechos: a contestar, a discutir, a tener opinión propia, a cuestionar y protestar. Han crecido escuchando que tienen derecho a una educación de calidad, pero no la tienen. La combinación de ambos factores, el interés colectivo y la determinación a exigir sus derechos, hacen que del malestar y la frustración, se pase a la movilización y que ésta alcance connotaciones cada vez más profundas. Del malestar inicial respecto a la calidad de la educación, el movimiento secundario consiguió extender la protesta hasta un malestar con el tipo de oportunidades que esta sociedad les ofrece. Aluden en definitiva –y con eso acaban de concertar un apoyo generalizado- al modelo de sociedad vigente. Terminan así de dejar claro que no era que a los jóvenes no les interesara la política; no les interesaban en realidad los políticos, esto es, la política vigente.

Pero todo esto no puede conseguirlo un movimiento sustentado en la pura voluntad y decisión. Las ganas no bastan, como comprobaron otros movimientos estudiantiles precedentes, universitarios y secundarios. El del 2006 no es un movimiento "espontáneo". Tampoco, como se intentó presentar inútilmente en su momento, es un producto de "agentes externos". Su depurada dinámica de organización y acción, sostenida en un ágil esquema de asambleas y vocerías, presiones y negociaciones, sumados a la celebrada combinación de una agenda "corta" y otra "larga", provienen –como ellos mismos remarcan en conversaciones- de un largo análisis sobre las movilizaciones precedentes, particularmente del llamado "mochilazo" del 2001. De dicho proceso provienen también las determinaciones conducentes a alcanzar una

mayor amplitud social y política en su interior (los sectarismos al respecto fueron considerados como uno de los principales factores que debilitaron la experiencia anterior), así como relativas a la configuración de mecanismos que permitieran un control por parte de las bases respecto de sus dirigentes, voceros y representantes en su máximo órgano, la Asamblea Coordinadora de Secundarios (facultades revocatorias, mecanismos de supervisión, los llamados Ministros de Fe encargados de fiscalizar que los representantes voten según sus bases, etc.).

Por ejemplo, gran parte del año 2005, lo consumieron en la elaboración de un documento que entregaron en noviembre con su visión de los temas que les preocupaban, lo que revela una reflexión sistemática con activa participación. Ello indica, pues, que el fenómeno no es nuevo; lo nuevo no es más que el hecho que saltó a la palestra, que se lograron abrir un espacio en un debate público que les resultaba mezquino. Es que, si se considera seriamente, no puede surgir de la noche a la mañana un grupo social con una extraordinaria capacidad de organización, capaz de sostener una prolongada demanda política de envergadura nacional; incluso superando momentos en que tanto los medios de comunicación como el propio gobierno intentaron dividirlos, o bien deslegitimar sus objetivos a través de la criminalización de su accionar. Pero nadie como los jóvenes para soportar y enfrentar el estigma de la delincuencia y la sospecha sobre sus conductas y acciones.

Para sorpresa del mundo político –al punto que enmudeció- irrumpieron jóvenes elocuentes con discursos bien articulados, que hablaban con propiedad de la LOCE, de los diversos tipos de quórums requeridos para modificar leyes y constituciones, que discutían en asambleas donde llegaban a acuerdos por mayorías, que entendían perfectamente –para lección de muchos "servidores públicos"- lo que significa un mandato de las bases, y que negociaban de igual a igual con las máximas autoridades. Aunque cueste a muchos, habrá que aceptar que la sólida e inteligente estructura de asambleas y voceros generó pertenencias sólidas e inéditas, y logró poner en evidencia las ambigüedades y contradicciones de las dirigencias políticas.

Por cierto que es una exageración atribuir, de forma generalizada, al movimiento secundario criterios igualitaristas. Precisamente uno de sus mayores éxitos resultó el mantener una asombrosa dosis de heterogeneidad, tanto ideológica como social, en la cual los criterios anteriores van a cohabitar con el malestar por la inexistencia de condiciones parejas de competitividad, por el derecho a competir en las mismas condiciones.

Cierto es también que algunos factores "externos" van a influir en la viabilidad del movimiento secundario. Uno de ellos, acaso el mayor, es el de las expectativas de participación y equidad que abrió en vastos sectores la campaña presidencial de Bachelet. Sin esas expectativas abiertas, y su correspondiente frustración a medida que avanzaba el tiempo, no puede explicarse por completo la conmoción social que logra producir el movimiento "pingüino". Pero tampoco podemos, a guisa de lo anterior, restarle los méritos propios. Bien sabemos que en la vida hay oportunidades,

pero otra cosa es tener la capacidad de aprovecharlas. Aún cuando muchos con algo de razón puedan juzgarlo frustrado por la resolución final del conflicto y la recomposición que logran los mecanismos de control social, el movimiento de los secundarios marcó un verdadero hito en los procesos de construcción de actores sociales efectivamente protagónicos, no simplemente denunciativos ni testimoniales, en la etapa histórica abierta desde 1989.

Para la memoria: el conflicto en sus números, imágenes y volteretas

Mucho se ha dicho que el que corre es un tiempo de la desmemoria. Volvamos a la retahíla de argumentos predominantes, para evaluar la experiencia social todavía fresca que se está considerando. Los teóricos del posmodernismo han indicado que estamos prisioneros de una suerte de "presentismo" en el que, por un lado el pasado se diluye rápidamente y, por otro, el futuro resulta marcado por la carencia de proyectos, y con eso el sentido mismo de la vida. Que la vida singular queda ineluctablemente enclaustrada en su inmediatez; que, a lo más, hay una sumatoria de singularidades sin que se elabore un horizonte trascendental (un imaginario colectivo o utopía) por medio del cual la vida en común puede ser concebida y abordada como obra de todos. Que, por eso mismo, el tiempo se vive como una secuencia de acontecimientos, de coyunturas, que no alcanzan a cristalizar en una "duración", es decir, en un período estructurado de pasado, presente y futuro. Que vivimos, en definitiva, en un presente continuo, un tiempo sin horizonte, en donde el problema de fondo es que ninguna experiencia logra crearse, más allá de la retórica del momento, un horizonte de futuro. Que prima, más bien, una ansiedad casi histérica por lo nuevo, lo efímero, la moda. Que se borra el pasado y, en consecuencia, la distancia histórica que daba relieve a la actualidad. Condensando el tiempo en un solo presente, entonces, la vida social deviene una superficie plana. Un aceleramiento del tiempo en que ya nada se afirma. De ahí, pues, que la cultura posmoderna aparece como una crisis de identidad. Claro, conforme a tal argumentación, ¿cómo afirmar una identidad en un presente recurrente? Cómo hacerlo en una temporalidad en que el individuo queda atrapado en una existencia desarticulada, en que los diferentes elementos desconectados, no se estructuran en una secuencia coherente; en un presente perpetuo. En tal ausencia de un sentimiento de identidad, pues, es dable pensar que el individuo no solo es nadie sino que tampoco hace nada. Que para superarlo tendría que tener proyecto, y eso implica comprometerse a cierta continuidad. Por cierto, no podemos dejar de concordar en el hecho de que, al romperse las continuidades temporales mediante las cuales nosotros seleccionamos y ordenamos los distintos aspectos de la vida, la visión de mundo deviene indiferenciada: una sumatoria ilimitada de elementos yuxtapuestos. En tanto el individuo no "filtra" el presente, tiene una experiencia más intensa, pero finalmente abrumadora. Vive

intensamente el instante, pero al precio de petrificarlo. A falta de ponerle límites al presente, de dimensionarlo, se ahoga en una inmediatez sin fondo.

De ahí el valor de las continuidades en esta discusión. Por eso, independientemente de que todo esto sea así o no –arena de otra discusión con la que no corresponde abrumar estas páginas-, más allá del análisis anterior conviene reseñar, brevemente, algunos elementos del conflicto en cuestión, para cuando nos falle –como dicen: indefectiblemente- la memoria.

Iniciado a fines de abril con la primera acción masiva de los secundarios (marchan recién alrededor de 15 liceos), el conflicto parte con la demanda de gratuidad en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y en la tarifa escolar, pero además, desde un principio reformas a la LOCE y a la Jornada Escolar Completa (JEC), y principia a concitar un creciente apoyo, primero entre apoderados, profesores, estudiantes universitarios, y luego en la sociedad en general. Desde entonces, el gobierno, como contraparte, ensayará sucesivas y contradictorias formas de encarar el conflicto, mudando los interlocutores (Subsecretaria de Educación, Ministro del ramo, Ministro del Interior, la propia presidenta, parlamentarios como intermediarios, etc.), espacios (mesas de negociación, comisiones y subcomisiones de diálogo, etc.) y grados de dureza tanto en el discurso como en la acción (al punto que la propia presidenta, en uno de los giros más comentados, anuncia en su momento que actuarán "con todo el rigor de la ley frente al vandalismo", para luego desdecirse reivindicando el derecho a protestar de los jóvenes y hasta acusar de excesos a la acción policial y al alto oficial a cargo), en un curso reconocidamente errático en el que los jóvenes representan al actor más claro y centrado en sus objetivos.

Entre medio, la convocatoria juvenil alcanza los 800 mil estudiantes movilizados a fines del mes de mayo a lo largo de todo el país (superando en la capital los 250 mil), con más de 950 colegios adheridos (más de 250 en la capital), a través de tomas de liceos y marchas que, a ratos, resultan duramente reprimidas, superando algunas de ellas el millar de detenidos por día. Números, en definitiva, que no tienen parangón en el país desde el fin de la dictadura militar.

Un aspecto a relevar es la forma en que el gobierno acepta considerar los aspectos particulares de la demanda estudiantil, a la vez que apuesta a dilatar las demandas de mayor hondura. Después de estériles intentos por desconocer la legitimidad del movimiento secundario, que pasa por erráticos cambios de interlocutores y escenarios, declaraciones contradictorias en que unas autoridades niegan a otras, el completo silencio sobre el problema en el informe anual del 21 de mayo (que irrita de tal modo a los estudiantes que, de ahí en adelante, dan curso a la verdadera masificación de las tomas, marchas y paros), el gobierno se allana a responder a las demandas estudiantiles a través de la propia presidenta.

A pesar de remarcar, en boca de la propia presidenta, que no se está negociando con los estudiantes, a la vez que afirma que éstos han abierto una oportunidad histórica de encarar el problema de la educación a partir de sus legítimas demandas,

se responde con ofertas particularistas del tenor de mejoras en infraestructura, aumentos en las raciones alimenticias, gratuidad de la PSU para los sectores más pobres y aumentos en el subsidio familiar. Al mismo tiempo, la discusión más sustantiva, sobre la LOCE y la JEC, se deriva sin mayores indicaciones gubernamentales a una numerosa y heterogénea mesa de diálogo que -todos coinciden en ello- al final de cuentas no pasó más allá de consignar las abiertas diferencias existentes entre los variopintos sectores sociales y políticos que la integran, a saber, los propios estudiantes (incluidos los universitarios), los profesores, sectores académicos, la CUT, técnicos del rubro, el empresariado, la iglesia católica, centros de estudios ligados a la derecha política y empresarial (como el Centro de Estudios Públicos y el Instituto Libertad y Desarrollo), entre otros. Lo peor de todo es que, al final, nadie quedó conforme con los resultados de la mesa: un documento saturado de indicaciones divergentes respecto a su hilo central, el cual, por lo demás, no sería rubricado por los estudiantes secundarios, los universitarios ni los profesores, quienes en masa abandonan dicha instancia. La iglesia también hará sus descargos, sumándose a las molestias expresadas por técnicos adscritos a los centros de estudios de la derecha y el empresariado. Difícil, pues, para un ya errático gobierno, haber encontrado mejor forma de provocar la insatisfacción de todos a la vez.

Al final, el gobierno no sólo no dejó contento a nadie, sino que dio muestras de sobra de su aturdimiento. Carente de un manual de manejo de conflictos sociales, lo ensayó todo con los "pingüinos": intentos por ignorarlos, descalificaciones, estigmatización, adulaciones, criminalización, represión, "arrepentimiento" (incluida la destitución de un general de la policía), negociación, cambios en los equipos encargados de "manejar" el conflicto (incluida la destitución del ministro del ramo), intervenciones directas de la presidenta (incluso por cadena nacional de televisión), la búsqueda del desgaste y quiebre de la fuerza estudiantil, etc. El mundo político –incluido el oficialismo- no trepidó en criticar la incapacidad y abierta improvisación del descolocado ejecutivo, mientras que los estudiantes no vieron en ello sino oportunismo y carencia de voluntad política para resolver el problema de fondo. Más fríamente se puede agregar que el gobierno subestimó completamente el poder y la capacidad de los estudiantes, así como la hondura de sus demandas.

En términos de imágenes de lo que fueron esos días –meses en realidad- dos hechos, puntuales pero representativos de los rasgos novedosos que para estos años de democracia trajo la insurgencia secundaria, valen de ser consignados. Uno –esta vez sí que impensable, fuera del canon de los conflictos sociales de los últimos quince años- es aquella oleada de respingados colegios particulares del sector oriente de Santiago sumándose al paro estudiantil, allá por fines de mayo. A tal punto llega el reconocimiento, el estremecimiento nacional frente al fenómeno de la movilización "pingüina", que el último día de mayo el país despierta con la insólita noticia que, bajo disímiles maneras –paros con charlas, actos culturales, colectas, marchas, jornadas de reflexión- se sumaron a un apoyo activo a las demandas y la lucha estudiantil un

número significativo de colegios cuyos estudiantes pertenecen, sin duda, a las franjas acomodadas del país (aunque no a las más ricas, es necesario hacerlo notar). Colegios como la Villa María Academy, el Colegio de los Sagrados Corazones de Manquehue, La Maisonnette, Compañía de María Seminario, Cambridge College, United College, Santa María de Providencia, Saint George's, Santiago College y La Girouette entre otros, se reunieron con sus pares provenientes de sectores de menos ingresos o abiertamente pobres. No completamente independiente de este esto, otro hecho resulta también representativo de los alcances que llegó a tener el conflicto. Pocos días después de lo anterior, un grupo de apoderados, preocupado por el rumbo que tomaban las cosas, en su mayoría vinculados al Liceo Lastarria y otros centros del sector oriente capitalino (casi anunciando los duros términos de desalojo de las tomas que luego emprenderá en contra de los estudiantes el alcalde de Providencia, pinochetista de claro currículum), se reúnen de noche un domingo, directamente con el Ministro del ramo, con el objetivo de buscar fórmulas para terminar con la movilización, en forma sigilosa y paralela a la mesa de negociaciones en la que participaba entonces el máximo órgano estudiantil a través de sus representantes. Los estudiantes movilizados en tanto, reunidos a esa misma hora en el Internado Nacional Barros Arana, discutían la propuesta que recién les acababa de hacer la propia presidenta Bachelet. Enterados de la reunión paralela, parten indignados hasta el Ministerio de Educación y comienzan a golpear sus puertas –la imagen más clara es la del espigado "Comandante Conejo"- para exigir una explicación por lo que consideran un "doble estándar" de las autoridades. Los medios de comunicación cubren profusamente la escena. Algunos canales de televisión interrumpen sus noticieros para transmitir en vivo los hechos, como expresión diáfana del grado en que el país, ya a esas alturas, resultaba conmocionado por el conflicto y atento al curso que asumía. Al otro día, iniciándose la semana, la prensa escrita anunciaba al unísono el quiebre de la movilización, trocando deseos con realidades sobre un conflicto que todavía le quedaba harto por andar.

LAS RAZONES DE UNA HONDA FRUSTRACIÓN CON LA EDUCACIÓN

De manera inobjetable, clara como pocas veces, lo que ha detonado al resto de los problemas ha sido el malestar que existe con el estado de la educación en amplias franjas de la sociedad chilena. Cualquier revisión entonces de las dinámicas sociales vinculadas a ello exige la revisión también del problema de la educación. Más que una discusión técnica, interesa aquí aproximarnos a las claves que explican su relación con el malestar manifestado este año.

El panorama de la educación chilena resulta abiertamente frustrante para la gran mayoría de la sociedad. Es sinónimo de desigualdad de recursos, de una reproducción del origen familiar, de segregación, de problemas en la formación de los profesores, de defectos en la asignación de las subvenciones.

El modelo vigente, que privilegia la llamada libertad de enseñanza, además de permitir un currículum flexible, estipula un subsidio estatal a la educación que se entrega a los sostenedores de los colegios, en la idea de que representa un incentivo para atraer estudiantes y, como tal, semejante competencia proveería una mejor educación, pues las familias escogerían escuelas exitosas y las de mal desempeño resultarían desplazadas. De este modo, en Chile el 90% de la educación básica y media recibe alguna subvención del Estado. Esta se paga por niño que asista al mes (a lo que los municipios más pobres alegan que tienen altos índices de ausentismo escolar en invierno por las enfermedades de los alumnos, acarreando descuentos automáticos por subvención a las escuelas municipalizadas). Y dicho subsidio se traslada de escuela si el niño que lo recibe es trasladado de establecimiento por sus padres. Es igual para toda escuela o colegio gratuito, sea municipal o particular. Los establecimientos subvencionados no pueden cobrar nada más, salvo sumas mínimas como la matrícula y el "financiamiento compartido", o sea, un aporte de los padres. De todos modos, los colegios gratuitos, sin subvención, tendrían que cerrar sus puertas. Claro que a los colegios particular subvencionados se les permite seleccionar a sus estudiantes, discriminación que opera por rendimiento escolar, discapacidad, religión, familia, etnia, etc., cosa que los municipalizados no pueden hacer: están obligados a atender "en los bordes" de las comunas a los más pobres, excluidos de otras escuelas y mantener esa obligación aunque les vaya mal. Ello establece a fin de cuentas una desventaja estructural respecto de los colegios particulares subvencionados, configurando una situación que los monetaristas, adalides del mercado, tildarían de "competencia imperfecta". De tal modo, nada tiene de sorpresa que desde 1981 a la fecha la educación pública venga retrocediendo sistemáticamente a favor de la enseñanza privada: si ese año la primera representaba el 78% ya en 2004 caía a un 48%, mientras que en el mismo lapso, la educación particular subvencionada ascendía de un 32% a un 44%. La educación particular pagada se mantendrá invariablemente en un 8%.

En los años ochenta, tras la idea de una descentralización, el régimen militar dejó al Ministerio de Educación sin escuelas ni liceos: todos pasaron a las municipalidades, según su ubicación territorial. Así las viejas escuelas públicas –inspiradas en la expansión racionalizadora del Estado Nacional- fueron sustituidas bajo dictadura por escuelas subvencionadas con nombres de fantasía o por escuelas municipalizadas. Pero los padres no accedieron a una información rigurosa que les permitiera elegir dentro del nuevo sistema (¿provee acaso el mercado tal tipo de información en alguna otra esfera?). En particular, la asimetría entre oferentes y demandantes es abismal en los sectores pobres. Por otro lado, las escuelas municipalizadas no internalizaron los costos de su mal rendimiento; sus déficit siguieron siendo financiados por la administración central. Aún más, como es reconocido, este esquema facilita también la proliferación de sostenedores de baja calidad.

La segregación social, que agrupa a pobres con pobres y ricos con ricos, se incrementó, dañando los resultados. Está comprobado que la segmentación de las escuelas por nivel socioeconómico o por capacidades –algo que pueden hacer las privadas, pero no las municipalizadas– perjudica los logros de aprendizaje. En buenas cuentas, esto significa que el Estado subsidia escuelas que discriminan. Hoy el mayor espejo de esta falta de equidad ya no está –como antaño– en la cobertura, sino en los magros resultados de las evaluaciones sobre los logros en el aprendizaje (Simce) pues, a pesar de que los recursos del sector se han triplicados en los últimos 16 años, de todas las reformas y cambios curriculares, la enseñanza no mejora para los más pobres que mantienen la brecha educativa con los colegios particulares, pasando el problema histórico de la equidad en la educación desde la cobertura a la calidad como elemento diferenciador. Así, se configuró una educación "para las manos" en las escuelas municipalizadas y otra "para la cabeza" en los colegios privados, siendo la escuela el lugar donde se consuma la predestinación social de los niños y los jóvenes.

Por lo demás, el financiamiento compartido acentuó el peso de las familias (cuando la escuela tenía por objeto disminuirlo). La comunidad abdicó toda autoridad en la escuela (y en cambio la entregó a los sostenedores). La educación principió a ser concebida bajo el modelo de capital humano (y las funciones éticas e integradoras del aprendizaje escolar se olvidaron). La formación de profesores se descuidó de manera grave.

Y aquí es que el progresismo ha comulgado con este modelo, sin siquiera discutir el diseño en lo más mínimo, sin abordar el déficit de integración y el maltrato a la igualdad que acarrea. ¿Qué han hecho al respecto los gobiernos de la Concertación? Diez leyes se han dictado desde 1991 a la fecha para introducir modificaciones a la LOCE, la mayoría se refirió a aspectos puntuales, pero ninguna modificó materias estructurales o de fondo. En un errático curso, carente de una estrategia capaz de abordar los problemas sustantivos, no pocos de estos proyectos sucesivos intentan corregir los problemas que han ido creando sus antecesores, lo que dota escasamente de racionalidad al sistema educativo. Desde el punto de vista estudiantil, en cambio, se planteó cambiar uno de los principios básicos con que cuenta dicha ley: la prevalencia de la libertad de enseñanza sobre el derecho a la educación. Incluso los últimos candidatos presidenciales no incluyeron modificaciones a la LOCE en sus programas ni discursos.

Es que el tema de la educación no es menor. Cambiar de raíz el sistema heredado de la dictadura, o al menos en forma sustantiva, implica decisiones políticas mayores. Es que el modelo de educación vigente está íntimamente relacionado con el modelo de desarrollo y la concepción de sociedad imperante. Por eso, los problemas de la educación, que tanta frustración y malestar están mostrando, remiten en buenas cuentas a los problemas y las limitaciones que impone el estilo de desarrollo vigente, lo cual significa además que el malestar con uno es en cierto modo un malestar con el otro.

Instalados ambos bajo la dictadura, en el modelo de educación está presente el sistema de vouchers ideado por uno de los economistas considerados padrinos del modelo económico chileno, Milton Friedman. Sólo que aquí el subsidio no se entrega a las familias (como pretendía Friedman), sino a los sostenedores de los colegios quienes así tienen incentivos para atraer estudiantes, en la idea que la competencia proveería una mejor educación. En todo caso, la fuente de financiamiento no causa controversias. La educación obligatoria se financia con impuestos.

En nuestro país ese financiamiento público se efectúa mediante un sistema de subsidios a la demanda (como sugirió Friedman). El Estado entrega dinero a las escuelas por cada niño que asiste a clases. Si cada escuela quiere maximizar sus ingresos –supuso Friedman– se esforzará por ser mejor para que así los padres matriculen a sus hijos en ellas. La competencia castigaría a las malas escuelas y haría que las buenas pudieran florecer. Un ideario que se aplica a muchos otros ámbitos de la sociedad a partir de la transformación del modelo de desarrollo que inaugura en Chile la dictadura.

Aunque existe en algunos países en forma parcial, Chile es el único país que cuenta con un sistema universal de vouchers (cosa que no debe extrañar, si se considera nuestra situación en áreas como el sistema previsional, de salud, en general el panorama en cuanto a "protección social"). El subsidio se emplea, a elección de los padres, en el sistema municipal, privado, religioso o de cualquier índole. Aunque, como se sabe, el sistema no ha funcionado bien. Los padres carecen de información; el sistema municipal tiene rigideces de las que carece el privado; algunas escuelas seleccionan, lesionando la integración; no hay mecanismos para evaluar el desempeño; los requisitos para proveer educación son mínimos.

Del hecho que la educación obligatoria la financie el Estado mediante vouchers, se sigue otra característica de nuestro sistema escolar: la educación financiada con fondos públicos puede ser proveída por entes públicos o privados. Una educación con cargo a rentas generales, pero restada a todo control efectivo (no sólo en términos de programas de enseñanza, sino también en términos de quién ingresa a la condición de sostenedor de un establecimiento particular subvencionado). El que los estudiantes ingresen a la variante pública o privada sólo depende de la elección de los padres, pero en condiciones de "competencia imperfecta". Más allá de los poderosos sectores que defienden el actual estado de cosas, a esta situación oponen algunos una vía para arreglar las cosas sin alterar lo sustantivo del modelo. Alegan que ninguno de los defectos antes anotados –y reconocidos por la amplia mayoría, excepto grupos minoritarios, a menudo directamente beneficiados por el actual estado de cosas– es fruto directo del sistema de vouchers. Por lo tanto, una solución al problema actual estribaría en constituir auténticas condiciones de competencia por la vía de que exista mejor información para los padres, requisitos de entrada más exigentes para los sostenedores (hoy todo un gremio), igualdad de condiciones entre el sector municipal y el privado, un currículum mínimo efectivo, formas de selección más

adecuadas, mayores subsidios a quienes más lo requieren, evaluación de resultados más allá del Simce, entre otras cosas, buscando hacer funcionar mejor el sistema sin alterar su diseño básico. En fin, apegándose con más rigor a la promesa liberal, de la cual reniegan a menudo los propios empresarios, con su tradicional lógica rentista.

Claro, en esa variante, de todos modos se pierde aquella función de la escuela como una institución integrada a un proyecto nacional y a la expansión de la república. Por cierto, hoy no sólo está en crisis la calidad de la escuela, sino el proyecto colectivo, nacional, que antes la legitimaba y le otorgaba sentido, ergo, hoy no sólo está en crisis la educación, sino también el valor y sentido que poseía. En cambio, a lo que se han opuesto los estudiantes secundarios es a la esencia misma del modelo educacional heredado: a que la educación particular se financie con dineros públicos. Han apuntado al centro del modelo como no lo hicieron antes los movimientos universitarios, consumidos en demandas corporativas ("arancel diferenciado", etc.), en tanto han exigido trocar las cosas en una dirección directamente opuesta a la imperante: los estudiantes secundarios han exigido que las platas públicas sean para la educación pública. Incluso han tenido el cuidado de no cuestionar la existencia de una educación privada, sólo han exigido que no se financie con dineros públicos. Y eso ha concitado un gran apoyo, además del reconocimiento a la capacidad de apuntar al centro del problema. Aunque es pertinente anotar que, el generalizado malestar con la educación, que apoyó la protesta por su actual estado, no necesariamente se puede atribuir por completo a esta segunda fórmula de solución, sino que es muy razonable pensar que se divide entre los dos campos de solución anotados.

Y estas diferencias no resultan menores. Pues actualmente todo esta centrado en la adquisición de conocimientos y habilidades para mejorar la posición del individuo en el mercado de trabajo, no en la formación de los alumnos en un saber general y en ciertas normas morales y/o republicanas. Entonces, unos coinciden en el malestar en tanto el actual sistema educacional no resuelve esos problemas, esto es, en la medida en que no opera efectivamente la promesa liberal de la "igualdad de oportunidades", que en definitiva significa igualdad de condiciones para competir. Mientras que otros cuestionan esta base misma. Como apuntábamos al principio de este apartado, ello remite las cosas al modelo de desarrollo, de sociedad vigente: ¿en función de qué ideales, de qué sueño de nación queremos educar a las generaciones que vienen?

Y es aquí que el gobierno, la Concertación como tal, como fuerza de conducción política, aparece más claramente que en otras oportunidades mirando el techo, jugando con la lengua dentro de la boca, sin decir nada, pidiendo a una heterogénea mesa de diálogo que diga algo al respecto. Queda, pues, desnudada como una fuerza de administración, que no guarda dentro de ella ya mucho más que eso. Carente de proyectos, y con eso, de definiciones. La presidenta decía a principios de junio, en medio de los momentos más álgidos del conflicto: "si algo recuerdo de mi paso por el Liceo 1, es el orgullo por la educación chilena". La pregunta que se

descuelga sola es: ¿cuál es, pues, el motivo de ese orgullo?. No sólo el gobierno y la Concertación han demostrado que no tienen voluntad ni determinación para intentar recuperar aquello que caracterizaba al modelo educativo del cual se dice sentir orgullo, sino que en buenas cuentas han devenido en la fuerza más efectiva de que se dispone en el país para administrar el actual modelo de sociedad y de educación.

Empero no por ello las cosas son más fáciles para quienes pretenden cambiar radicalmente dicho modelo. Es innegable que el sistema neoliberal se ha naturalizado al punto de transformarse en "verdad" situada más allá de la voluntad de los individuos. A al punto que promover, por ejemplo, una universidad pública gratuita parece hoy una declaración obscena porque atentaría contra el éxito y la estabilidad del "modelo chileno".

Sin embargo, la idealización del modelo de educación anterior ilustra la medida en que se ignora la complejidad de construir un sistema educativo de calidad sobre la base de la inédita cobertura que hoy alcanza la educación, de hecho mucho mayor que la del modelo educativo mesocrático anterior, restringido a aquellos que resultaban incorporados política, económica y socialmente al modelo desarrollista. Por cierto que los incorporados representaban una porción de la población mucho mayor que la que resulta efectivamente integrada en la actualidad. Pero eso no puede llevar, bajo el signo de la idealización, a desconocer que la incorporación de los sectores obreros urbanos y las franjas medias vinculadas al empleo burocrático estatal, se asentaba sobre la base de la exclusión de amplias capas populares tanto rurales como urbanas. El propio gasto social del Estado, por cierto proporcionalmente mucho mayor al actual, seguía una matriz de distribución "con cintura de gallina", al decir de Aníbal Pinto, esto es, se consumía preferentemente en los sectores medios y medios bajos de la sociedad, alcanzando poco de ello para los que estaban más abajo.

El problema es que a lo largo de los últimos años, hay que reconocerlo, esos sectores más bajos de la pirámide social han accedido a la educación. No es posible desconocer el aumento sostenido de la cobertura del sistema educacional. Claro, se podrá alegar que esa cobertura se ha producido de la mano de un deterioro acentuado de la calidad de la enseñanza. Lo cual también es cierto. El problema es combinar las dos cuestiones: una educación de calidad, sobre la base de la cobertura que alcanza hoy el sistema educativo. Eso como tal, nunca lo resolvió -¿acaso lo buscó?- la educación de mayor calidad que cobijó el extinto Estado de Compromiso. Cuando nuestra presidenta iba al Liceo 1 la cobertura en educación media no alcanzaba al 50% de los jóvenes, y el promedio de escolaridad para la población mayor de 15 años era de apenas 4.3 años, esto es, mientras la niña Bachelet recibía una educación gratis de calidad, los pobres de verdad no tenían acceso. En cambio hoy la educación media está universalizada en el país. La idea conforme a la cual la vieja educación pública, de calidad indiscutible, resultaba meritocrática e inclusiva, es falsa. Era excluyente. Los pobres no accedían a ella. La masificación de la enseñanza secundaria

se produjo recién en los años noventa, de la mano –hay que considerarlo- de un sistema que entrelaza educación pública y privada en las formas nada justas que ya hemos comentado, es decir, en las manos de quienes en vez de educadores parecen tiburones. De modo que la idealización de los tiempos pasados no hace avanzar mucho las cosas, en tanto ignora la especificidad irreductible del presente y sus complejidades. Esas nostalgias son injustificadas.

"ADELANTE MUCHACHOS":
EL MALESTAR CON LA MODERNIZACIÓN SE ASOMA A LA CALLE

Como si fuesen pocos los motivos anteriores para incubar un fuerte malestar con el estado de la educación, se agrega además una razón que está imbricada, a guisa de sustrato, con todo lo anterior. Según se ha demostrado en varias ocasiones (los propios informes anuales del PNUD lo indican), en las imágenes socialmente instaladas la educación aparece vinculada por sobre cualquier otro factor con las expectativas de ascenso social. Luego, en el malestar con la educación aquí considerado hay también una frustración de las expectativas de ascenso social vinculadas a ella. No es, por tanto, sólo un malestar con la precaria calidad que muestra la educación, sino también un malestar de aquellos que, accediendo a una educación de cierta calidad, no ven que eso se traduzca en oportunidades de ascenso social siquiera cercanas a sus expectativas. Entonces es también un malestar con la actual educación para la desigualdad, para la segmentación, la diferenciación social, una educación que no conduce a la movilidad, al ascenso social, esas promesas de la ideología liberal en boga.

Claro que las restricciones al ascenso social no son responsabilidad ni se deben únicamente al estado y el carácter de la educación, sino que tienen que ver con el modelo de sociedad como tal. De ahí que, el malestar con la educación que se desata este año, resulte expresivo de otros malestares, acaso mayores. Como también el aplauso generalizado, esa extendida conmoción que dejan a su paso los jóvenes movilizados.

Es pues un malestar con la desigualdad, con las razones reales de la diferenciación social, que no residen –como sugiere el mito liberal– tanto en la competencia como en la monopolización de las oportunidades. El mítico informe del PNUD de 1998 ya indicaba que, bajo el actual orden de cosas, amplios y variados sectores de la sociedad incubaban un significativo malestar a partir de la percepción de que el país crece a un ritmo mayor al cual crecen sus propios ingresos, oportunidades y horizontes. Se trata, pues, de un malestar por los grados existentes de concentración del ingreso, fuente principal de la desigualdad actual. Un hecho que choca violentamente con arraigados patrones culturales provenientes, en buena medida aún, de un modelo anterior de sociedad regido por un distributivismo de carácter

mesocrático. Es que no siempre existió semejante concentración excluyente de las oportunidades como la que muestra el panorama actual de la sociedad chilena.

En estas condiciones, la educación, comúnmente considerada como la vía principal para el logro de la movilidad y el ascenso social, entrega un panorama frustrante no sólo en cuanto a la calidad de la enseñanza sino también en este sentido señalado, por lo que, si la educación deviene más bien en fuente de desigualdad, queda claro para estos sectores que, hablar de crecimiento entonces parece más bien un engaño.

Una cosa entonces es explicar el apoyo de los sectores populares al movimiento "pingüino", y otra bien distinta -y a menudo eludida- entender las motivaciones del apoyo de sectores medios muchas veces acomodados a éste. Es que no sólo en las comunas populares del país recibieron muestras de apoyo los estudiantes movilizados, sino que inéditamente estas se propagaron hasta más "arriba" de Ñuñoa y Providencia, alcanzando a La Reina, Las Condes y Vitacura, entre los barrios del acomodado sector oriente de la capital. Repitiendo una rutina empleada para solidarizar con la Teletón, en medio del conflicto secundario una enorme cantidad de autos del sector oriente aparecieron con su vidrio trasero pintado con cal alegando "NO + LOCE", tocando sus bocinas en caravanas, dando vuelta a las plazas luego de algunas de las más logradas marchas de los "pingüino"s. Si en el caso de los sectores populares el detonante es su exclusión de la enseñanza de calidad, de una educación efectivamente integradora (así como una exclusión cultural, política y económica, una exclusión general, social en definitiva), en el caso de los sectores medios acomodados la exclusión que perciben no puede estar referida a los mismos factores que en el caso de los primeros. En el caso de los sectores medios, incluidas algunas franjas acomodadas, se percibe una exclusión de la fiesta de la concentración del ingreso, dada en esa señalada imagen de que "el país crece a un ritmo mucho mayor del que nosotros crecemos". Estas clases medias están cansadas del cierre social de la verdadera elite, y la medida en que concentra entonces la inmensa mayoría del fruto del "éxito" del modelo chileno.

Y he aquí que el movimiento "pingüino" –a diferencia de los corporativos movimientos universitarios anteriores– logró apuntar al meollo del problema de la educación chilena. Antes de la última movilización de los estudiantes secundarios las protestas sociales no alcanzaron semejante reconocimiento, en gran medida dado que se reducían a un carácter estrictamente popular, al tiempo que levantaban demandas muy específicas, economicistas, que no involucraban los intereses de otros sectores, ni siquiera muchas veces populares propiamente tales. El momento más álgido de ello fue en el año 1997, en donde coinciden los mineros de Lota, los profesores primarios, los trabajadores portuarios, los mapuches y los estudiantes universitarios[1]. Pero a excepción de los universitarios, por lo demás entonces bajo

[1] Para un análisis de este proceso véase Ruiz, Carlos, *La opacidad social*, Revista Análisis del año 2005. Política, Sociedad y Economía, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, Santiago, enero, 2006.

conducción comunista, el carácter social de los movilizados resulta estrictamente popular. Y las demandas de unos y otros escasamente articulables, incluso entre sí, dado su acentuado carácter corporativo. El propio movimiento universitario no pasa de su demanda arancelaria a la hora de criticar el estado de la educación. Esta vez, en cambio, no fue así. Los secundarios apuntaron a los dilemas centrales que mantienen tanto el deterioro de la calidad de la enseñanza como su carácter segregante. Y cuando alguien da en el medio de un problema sentido por muchos, el aplauso no tarda en dejarse caer. Rompieron así con una tendencia corporativa y restrictiva que había marcado hasta entonces a los conflictos sociales en la etapa democrática, concitando esta vez el apoyo mesocrático en la medida en que logran expresar también el malestar de los sectores medios del país.

He ahí una de las fuentes de reconocimiento que explican el extendido apoyo social que alcanzan. En ello inciden en no poca medida ciertas formas que adopta el propio movimiento "pingüino", como el control que logran de los instintos sectarios en su seno, tanto en términos sociales como políticos; algo también inédito en los movimientos sociales de los últimos tres lustros, muy a menudo reducidos a la izquierda extraparlamentaria, y expresivos de importantes dosis de resentimiento social, que limitan su reconocimiento a los sectores más duramente excluidos. Muchos estudiantes secundarios, que pudieron compartir algo de esto último, estimaron políticamente más importante mantener y proyectar una alianza social y política amplia, cuestión que les granjeó un extendido reconocimiento. Ello habla de una loable capacidad política.

El movimiento secundario, con su imagen de independencia de las desprestigiadas maquinarias políticas vigentes, ofrece la posibilidad que importantes sectores de la sociedad expresen sus malestares a través de un actor que no los compromete con las reparticiones políticas actuales. De cierto modo, el movimiento secundario recoge ese apoyo que en otro momento concitó el llamado fenómeno Bachelet, cuando aún no era candidata, incluso tampoco todavía pre-candidata. Entonces la futura presidenta se erguía en las encuestas por sobre aquellas figuras que preferían las maquinarias políticas. Bachelet en su momento expresó ese rechazo a la política, ese malestar con la política. Pero luego fue perdiendo esa condición. La gente la fue asimilando gradualmente a aquél mundo político de cuyos vicios antes la consideraran inmune; precisamente uno de los puntos más claros en que pierde en forma notoria tal condición es con su actitud ante el movimiento de los "pingüino"s. Éstos, por el contrario, se erguirán como el fenómeno que en las nuevas condiciones expresará entre otras cosas ese malestar que viene acumulándose hace más tiempo ya.

Otro tipo de reconocimiento al movimiento de los estudiantes secundarios, en cambio, la solidaridad del espectro político, en toda su diversidad, se produjo sólo una vez que éste movimiento probó su eficacia. Más aún, se puede señalar que parte de este respaldo se caracterizó por un franco oportunismo, un modo de conseguir cámaras, de ingresar al mundo mediático que cubrió a los estudiantes, de hacerse

parte de un hecho del que no formaron parte como no sea en el sentido más laxo y menos comprometido del término. Pero ello no hizo sino rebelar la forma en que opera el mundo político oficial, cómo la oficialidad política se pliega y se despliega ante todo aquello que le permita un instante de presencia televisiva, sin pudor alguno, apropiándose de escenas y escenarios ajenos como fue el movimiento "pingüino".

El descontento estudiantil rebeló un país real que estaba constreñido, impedido de mostrarse en toda su magnitud. Eso explica la perplejidad que se apoderó de los observadores extranjeros, incluidos expertos en América Latina, quienes hasta entonces parecían no tener suficientes palabras con las que alabar los éxitos del "modelo chileno". Es más, la protesta estudiantil dejó en evidencia la distancia entre el Chile real y los tópicos de la discusión en el espacio público; mostró hasta qué punto éste se había encapsulado en sus propios referentes, en un diálogo cerrado de reverencias entre el mundo político y los medios de comunicación de masas. Los estudiantes de colegios municipalizados de Chile, los más pobres y de peores resultados en las pruebas internacionales fueron los que obligaron al país a mirar la realidad, que lo conmovieron y lo llevaron a indignarse, y apoyarlos. Después de la movilización de los "pingüino"s, entonces, resulta más difícil justificar la inercia política, culpar de todo a la herencia de una institucionalidad amarrada por la dictadura. Los estudiantes secundarios despertaron a la ciudadanía a la evidencia de que los amarres se pueden desatar, que las leyes, incluso las orgánicas, se pueden reformar y también derogar, que crear una nueva institucionalidad no es un imposible.

La enorme simpatía que despierta el movimiento "pingüino" está, de este modo, muy vinculada a la posibilidad que ofreció –a partir de sus rasgos- a amplios y heterogéneos sectores de la sociedad para sacudirse del pesimismo y la impotencia.

El mito de la expansión de las clases medias

Advertida la presencia de otras dimensiones, distintas a la enseñanza, en el reciente conflicto por la educación, así como de una diversidad de sectores sociales que –por distintas razones– apoyan a la protesta de los jóvenes. Advertida también, la efectividad con que esos noveles personajes desnudaron la crisis del modelo educacional vigente y capturaron un malestar de extensas franjas de la sociedad que no encontraba expresión en la política ni el espacio público, dada el modo en que estos se hallan configurados por entelequias ensimismadas. Podemos revisar –como hemos venido haciendo- aquellos mitos, hoy derrumbados o trastabillantes, que en su reiteración a coro por las autoridades, la clase política, la intelectualidad cortesana y los medios de comunicación de masas, oscurecían el panorama del Chile real que ha irrumpido de la mano del movimiento "pingüino".

El más reiterado de esos mitos, y por momentos no poco arraigado, es aquél que indica una expansión sostenida y a niveles inéditos de la clase media en Chile en el ciclo histórico reciente. Tales imágenes apuntan a "un país dominado por la clase

media", en palabras de Roberto Méndez. Clase que, según dichas estimaciones, constituye el grupo mayoritario del país, alcanzando al 65% de la sociedad chilena, crecimiento que se explica por ¡la mayor cobertura educacional!. Una clase media que, en virtud de este hecho, "domina numérica, económica y culturalmente", por lo que "está afectando la forma como se gobierna, como se hacen los medios de comunicación, la entretención, la televisión". Tales visiones, por cierto, reconocen que –aunque no explican por qué– esa clase media se organizó y movilizó recientemente para protestar por la educación.

Empero, al contrario de esta imagen mitificada por los medios y la sociología apologética del modelo, no sólo ocurre que no hay tal expansión de las clases medias (habría que empezar precisando qué se entiende por clase media), sino que las verdaderas clases medias se encuentran más inestables, reducidas, inseguras, sometidas a la mayor tasa de movilidad social que registra la sociedad chilena actual (a diferencia de los sectores situados en los extremos altos y bajos de la pirámide social), el mayor grado de volatilidad en sus posiciones sociales o, dicho en otras palabras, que los individuos ubicados en este sector enfrentan el riesgo más alto de perder la posición en que se encuentran[2]. En suma, que no la pasan bien y están, por lo demás, excluidas de la fiesta mayor, dados los elevados índices de concentración del ingreso, al tiempo que muchos sectores considerados en dicha imagen mítica como clases medias en realidad no lo son, y difícilmente lo serán. Por ello, al hablarse así de clases medias, se está hablando no sólo de aquellas franjas efectivamente incluidas en tal categoría social sino también de extensos sectores que en realidad no lo están. Dicha imagen no sólo busca encandilar a los auténticos sectores medios haciéndolos sentir como la parte fundamental de la sociedad y la más beneficiada por el modelo vigente, sino que busca encandilar también a extensos sectores populares que en rigor no pertenecen a dicha categoría social. Ello a pesar de que, en algunos casos pertenecientes al mundo popular, producto de la expansión y segmentación del sistema de educación superior, sus hijos hayan accedido a una formación universitaria a diferencia de sus progenitores, puesto que eso no implica mecánicamente tal ascenso social. Como indican estudios recientes, la relación entre un aumento del capital educativo y un aumento en el nivel de ingreso resulta claro en aquellos segmentos en que se produce un ascenso desde el trabajo manual al trabajo no manual, pero no así para las franjas medias, en donde el aumento del nivel educativo se relaciona más bien con la defensa

[2] Este rasgo de los sectores medios, el sector más dinámico en términos de movilidad social, se ha mantenido a lo largo de la transformación que la sociedad chilena ha experimentado en las últimas décadas, que arranca a fines de los setenta con el denominado proceso de "privatización de las clases medias", y que se proyecta hasta la actualidad como un rasgo no ya de transición sino inherente a dicha posición social en el actual modelo de sociedad. Para una ratificación empírica reciente del fenómeno puede verse Wormald, Guillermo y Florencia Torche, *Estratificación y movilidad social en Chile: entre la adscripción y el logro*, División de Desarrollo Social, Serie Políticas Sociales No. 98, Cepal, Santiago, octubre, 2004.

de la posición social detentada, pues sin tal aumento, el descenso social parece inevitable[3]; esto coincide con el hecho ya anotado de que las posiciones sociales de los sectores medios son las que resultan más inestables en la actual dinámica social.

Entre las imágenes más burdas que se han usado está aquella, empleada desde Patricio Navia a Roberto Méndez, que reza que por sobre un ingreso de 300 mil pesos mensuales se puede considerar a un individuo como un miembro genuino de la clase media. Amén de que, como sabe hace mucho tiempo la sociología, ello no se define simplemente por un corte de ingreso, no quita que podamos impresionarnos por el grado de distorsión y/o ignorancia que porta la cifra espetada. Entre otras variables, por cierto, el ingreso incide, y todo el mundo sabe en este país que tal ingreso resulta claramente precario para poder vivir con dignidad, que resulta por lo demás completamente insustancial para poder encarar cualquier costo de salud o educación de alguna consideración, y que conduce a una jubilación absolutamente decorativa. El problema es que, basados en la enorme expansión que aprecian según esos parámetros, plantean entonces una asociación directa con una mayor estabilidad de la democracia y el desarrollo, en tanto consideran que estos elementos están inexorablemente asociados al estado de salud de la clase media en una sociedad. Si es así, si la situación de la clase media tiene tales connotaciones como las que afirma esta difundida visión ideológica, entonces conviene echar un vistazo al estado de dicha salud.

Desde el punto de vista de los ingresos se ha insistido en su aumento sostenido en el último período. Un panorama que, por cierto, marca una distinción de la realidad chilena en el contexto latinoamericano, como recientemente ha refrendado la Cepal. La razón de ello está en el ciclo de crecimiento económico sostenido, aunque la presentación habitual de este hecho no considera otros aspectos. Por un lado, la apuntada sensación de que los ingresos de las personas crecen pero a un ritmo menor al que crece el país, lo que implica que en alguna parte de concentra la mayor proporción de ese crecimiento general. Por otro lado, la efectiva ampliación de los ingresos debe prorratearse con el volumen de gastos que tienen que cubrir en el actual modelo de sociedad. El proceso de privatización de las condiciones de vida que significó el desmantelamiento de los viejos servicios públicos y sistemas de protección social, eleva a niveles inéditos los costos de mantención que recaen ahora directamente sobre el bolsillo de los individuos, consideración que no hacen los análisis apologéticos de las bondades del crecimiento económico reciente al resaltar unilateralmente lo primero. Se destaca en cambio la sorprendente expansión del consumo que va aunada a este crecimiento de los ingresos, por ejemplo en las formulaciones de Eugenio Tironi. Se habla de una "democratización del consumo", en la medida en que otras capas se incorporan a éste, así como de una satisfacción social generalizada a partir de ello, cuestión, ésta última, discutible a la luz de los

[3] Véase al respecto Wormald y Torche, *op. cit*.

malestares expresados recientemente con las promesas incumplidas por la modernización. Pero la desaparición de las viejas políticas sociales que incorporaban fuertes apoyos a la resolución de aspiraciones habitacionales, educacionales, cobertura de salud y en la cuestión previsional, entre otras, implicaban no sólo un nivel de seguridad más alto para los individuos sino que una suerte de "salario ciudadano" otorgado por el Estado, al decir de los socialdemócratas europeos, que como tal también habría de considerarse en las comparaciones históricas que se hacen ignorando en forma maniquea tal hecho. Precisamente la extendida sensación de inseguridad actual en gran parte de la sociedad chilena –que ha comprobado empíricamente el PNUD en sus registros- se produce en forma paralela a este aumento de los ingresos. La paradoja apenas aparente que pudiera haber en tal coincidencia se disipa apenas se considera el grado extremo en que, en el actual modelo de sociedad, se hacen recaer los gastos de salud, educación, vivienda, previsión, etc., sobre los ingresos directos de los individuos, los cuales, por lo demás, se hacen más inestables a medida que se extrema el ya fuerte régimen de flexibilidad laboral[4].

Si apelamos a los últimos datos oficiales disponibles (los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) de 2003), se tiene que, en términos de distribución del ingreso, si la distancia entre el primer y último veintil de población (5%) en 1989 era de 137 veces, en 2003 esta distancia aumentaba casi al doble: 209 veces[5]. Pero tal expresión del aumento de la desigualdad en la sociedad chilena no responde tanto a un aumento de la pobreza (o sea a un desplazamiento hacia abajo del sector más pobre respecto del más rico), pues la pobreza va disminuyendo de algún modo (por cierto, existen cuestionamientos atendibles a la noción oficial de pobreza). Más bien ocurre todo lo contrario, el sector que se despega del resto de la sociedad es el de mayores ingresos. Tal distanciamiento se produce no sólo respecto del veintil más pobre, sino que, aunque en diferentes magnitudes, sobre todo el resto de la sociedad chilena, revelando que el carácter distintivo que asume la desigualdad en la sociedad chilena actual estriba, a diferencia de antaño, en el agudo proceso de concentración del ingreso experimentado en los últimos tres lustros que corresponden al período democrático.

---

[4] Sobre este problema se encuentran interesantes aproximaciones en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD titulado "Las paradojas de la modernización, de 1998, particularmente los capítulos 7 y 8, "La protección frente a las amenazas: salud y previsión" y "La realización de las oportunidades en educación, trabajo y consumo", respectivamente. Para una comparación en algunos de estos ámbitos entre el panorama chileno y latinoamericano, puede verse también Ruiz, Carlos, *¿Habrá crecimiento con igualdad para el Bicentenario?*, Revista Análisis del Año 2004. Política, Sociedad y Economía, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, enero, 2005.

[5] Para estas y otras referencias sobre el panorama de la desigualdad en Chile, y su comparación con otros países de la región y el mundo, véase el mismo articulo Ruiz, Carlos, *¿Habrá crecimiento con igualdad para el Bicentenario?*, *op. cit.*

Puesto en otros términos, en los últimos quince años el país a registrado un inédito proceso de expansión económica, pero los frutos de dicho crecimiento se han concentrado marcadamente en una franja muy exclusiva de población. Un veintil de población (5%) corresponde en esas mediciones aproximadamente a unas 750 mil personas. Tal medida del sector más beneficiado resulta todavía muy gruesa, pese a que se contrapone al restante 95% de la sociedad. Cobija en su interior una importante disparidad de ingresos, por lo que aún resulta muy heterogénea para ilustrar con alguna precisión al sector que concentra los frutos del crecimiento económico reciente. Referido directamente a la distancia entre los grupos medios y el 1% más rico de la población, se tiene que si en los grupos medios el ingreso promedio familiar mensual aumenta de 510.000 a 710.000 pesos entre 1990 y 2003, para el segmento más rico lo hace de 6.600.000 a 10.200.000 en ese mismo lapso. Ello explica, por ejemplo, que el mercado de lujo crezca a tasas mucho mayores que las de cualquier otro segmento de éste, mientras que el fenómeno del sobreendeudamiento abarca al 76% de la población, dejando fuera, además de esta elite económica, a aquellas franjas que no son consideradas sujeto de crédito por las entidades financieras dado lo extremadamente exiguo de sus ingresos.

Estos números están diciendo que no sólo los sectores más pobres han quedado excluidos de la fiesta del crecimiento económico en todos estos años, sino también los trabajadores estables e incluso las propias clases medias, incluyendo a muchas de sus capas más acomodadas. De ahí que, al malestar continuo de los pobres y los trabajadores, se ha empezado a sumar, de modo gradual pero ascendente al menos desde 1997 en adelante, el malestar de estos sectores medios. Comienza a aflorar un malestar mesocrático, que le imprime nuevos rasgos al más conocido malestar popular con el patrón de crecimiento económico vigente y el modelo de sociedad a él asociado.

La sostenida expansión de las clases medias en todos estos años es, por tanto, un mito. En la medida en que a dichas clases se les considera habitualmente asociadas a la estabilidad de la democracia y el desarrollo, entonces no es difícil comprender que se trata de un mito ideológico, que busca efectos políticos. Por lo que, si se tiene en cuenta que lo que ocurre no es nada de eso, sino más bien la aparición de un sector con aguda conciencia de que está excluido de los festines más suculentos abiertos por el crecimiento económico, que no encuentra medios efectivos -la educación incluida- para acceder a él, entonces se puede concluir que el aumento del malestar de estos sectores medios constituye un riesgo para la estabilidad política acaso más sensible –dada la estructuración del régimen político– que el que han expresado los sectores más pobres, así como los trabajadores.

Como recordábamos arriba, en 1997, el año más álgido en cuanto a conflictos sociales del período democrático antes de la revolución "pingüina", concentró las fuertes protestas de los trabajadores del carbón, de los puertos, de la educación básica, de mapuches y estudiantes. Todo ello con el claro predominio –en formas y contenidos- de un claro carácter popular en las decenas de miles de personas que

entonces se movilizaron. Un típico personaje de los círculos más determinantes de la política oficial, Gutemberg Martínez, apuntaba entonces que el sistema político podía soportar sin mayores problemas hasta diez de ese tipo de sectores movilizados simultáneamente, dado su carácter social. Esta vez, en cambio, detrás de la protesta de los secundarios apareció, además de los sectores ya conocidos en los últimos conflictos sociales, el malestar mesocrático. Y quedó claro que, con su apoyo, le imprimió connotaciones nuevas al conflicto social, especialmente en término de proyecciones políticas.

Es que el malestar mesocrático remite a la insatisfacción del sector más influyente en la configuración cultural del país durante la mayor parte del siglo pasado, que constituye en gran medida –para bien o para mal, ese es asunto de otra discusión– las imágenes, idearios y expectativas de los propios sectores populares. De ahí la complejidad que reviste para este tipo de regímenes políticos el malestar de las clases medias.

CAMBIO CULTURAL Y "MALESTAR EN LA CULTURA"

El panorama de los sectores medios en el país, entonces, no aparece precisamente signado por una expansión numérica sostenida. Tampoco por una arraigada satisfacción producto de la expansión del consumo. Otros fenómenos, vinculados al llamado cambio cultural resultan más expresivos de este sector de la sociedad.

Como se ha estudiado, las actitudes más conservadoras, por ejemplo con respecto a la familia, se aprecian en los últimos años en los extremos de la pirámide social: el sector alto y los más pobres tienen una visión mucho más conservadora con respecto a la familia. En los más pobres la disolución de la familia suele tener consecuencias desastrosas para el nivel de vida. En los medios es donde se ha producido en mayor medida el cambio valórico y cultural.

Aunque, más que un cambio cultural acendrado, estudios recientes (como los presentados este año por UC-Adimark y Mori) parecen indicar que estamos en medio de una transformación cultural que todavía tiene harto por recorrer. Otra cosa es que, al irrumpir este proceso, llame tanto la atención frente a los arraigados patrones conservadores que marcaron la cultura chilena por centenas de años. La dinámica de transformación es acelerada, lo que significa que los niños actuales habitarán un país aún más diferenciado de los viejos patrones conservadores, y les parecerá que en un tiempo como hoy apenas se apreciaba el "cambio cultural" en función de las dimensiones que, a este ritmo, llegará a alcanzar.

Esta es una cuestión sobre la cual se especula considerablemente más de lo que se sabe. La mayor parte de los datos enarbolados proviene de encuestas. Pero la interpretación de encuestas de opinión sobre temas valóricos o visiones de la vida porta siempre el riesgo de trocar la opinión de una persona con lo que efectivamente se piensa o se siente en términos de orientar comportamientos. En la sociedad

actual se produce una fuerte incongruencia entre lo que se afirma que se piensa y los comportamientos que se dan en la práctica, porque la velocidad de cambio en las formas de convivencia y en la subjetividad no va acompañada de esa misma velocidad en cuanto a las formulaciones verbales y estereotipos que la gente tiene en su mente. Así, se responde verbalmente mucho más a partir de esos estereotipos que a partir de lo que son las vivencias y conductas efectivas, de modo que no pueden extraerse conclusiones sobre determinados temas a partir de preguntas y respuestas simples. De ahí que se produzcan interpretaciones que desconocen la realidad de los comportamientos efectivos, así como distorsiones de los mismos datos para llegar a conclusiones basadas simplemente en intereses ideológicos particulares. Por ejemplo, respecto de la reciente Encuesta Nacional Bicentenario UC-Adimark (con apoyo de El Mercurio y el Canal 13 de televisión) se desconoció que un 47.2% justificaba el aborto en ciertas circunstancias, o que el rechazo declarado a aventuras ocasionales en la pareja contrasta absolutamente con la generalización de esta conducta, o que la afirmación que el matrimonio es un compromiso para toda la vida es un dato obvio que hay que contrastar con la masificación de rupturas y de uniones temporales. Los resultados de dicha encuesta intentarán rebatir especialmente la idea que la familia en Chile "está en crisis" o viviendo un acelerado proceso de transformación[6].

En general los estudios coinciden en destacar que los niveles de satisfacción en los distintos ámbitos revelan la muy desigual distribución de las oportunidades de felicidad entre los distintos sectores sociales. Es decir, no sólo las oportunidades y recursos materiales o educacionales, como ya se sabe, revelan una gran injusticia en la sociedad, sino que la felicidad, el afecto, la seguridad ratifican y agudizan la desigualdad. En términos fácticos, la estructura tradicional de familia –madre y padre casados, con hijos- ha ido acelerando su transformación. Si en 1989 se celebraron 104 mil matrimonios, en 2003 esta cifra cae a 58 mil y en 2005 a sólo 38 mil; aunque, según el Censo 2002, el 58% de los hogares aún está constituido por matrimonios. Mientras, según los censos, las convivencias suben de un 3.4% en 1982, a un 5.7% en 1992, y finalmente a un 8.9% en 2002, en condiciones en las que el porcentaje de hijos que nacen fuera del matrimonio crece de un 40% en los años ochenta a un 56% en los noventa. Todo ello de la mano de cambios importantes en los papeles sociales que desempeña la mujer. Por ejemplo, los hogares a cargo de una mujer pasan de un 25.3% en 1992 a un 31.5% en 2002, mientras que las mujeres que trabajan pasan, en este mismo lapso, de 28% a 37%. Como se indicó, aunque las magnitudes aún no indican proporciones todavía preponderantes, las tendencias son claras, así como el hecho que el arraigo de estas proporciones resulte mayor en los sectores medios.

[6] Véase Larraín, Soledad, *Mujer, trabajo y familia: Desafío pendiente*, El Mercurio, domingo 5 de noviembre, 2006.

En términos valóricos, en los últimos 15 años se registra un sostenido aumento de la tolerancia hacia la homosexualidad, el divorcio, a la prostitución, al aborto, la eutanasia, entre otros valores seculares, aunque, pese a tal aumento, no alcanza los niveles de sociedades más liberales como las europeas (sobre todo de la Europa protestante) y algunos casos latinoamericanos. Las encuestas dicen, además, que aun quienes se definen a sí mismos como católicos hoy tienen posiciones frente al divorcio, al aborto, a la posibilidad de que los separados y vueltos a casar puedan comulgar, que se ordenen sacerdotes mujeres, sorprendentemente más liberales de lo que se pensaba.

Si de la encuesta UC-Adimark se desprende –indican sus realizadores- que Chile "aparece, por lejos, como uno de los países más religiosos del mundo", por otra parte una encuesta de la consultora Mori, que integra el Estudio Mundial de Valores (aplicado en 80 países), indica que la sociedad chilena está siendo cada vez más materialista, liberal y secular, constituyendo con ello incluso una suerte de excepción en el marco latinoamericano. En particular revela que, en 16 años, las iglesias en Chile, en especial la católica, responden menos a las necesidades espirituales (81% en 1990 a 64% en 2006); a los problemas de la vida familiar (77% al 52%); a problemas morales y necesidades individuales (72% al 47%), y a los problemas de tipo social (70% al 43%).

En términos de los cambios en la familia el mismo estudio indica que si en 1990 el 15% de los chilenos pensaba que el matrimonio constituía un tipo de unión que era anticuada, en 2006 se eleva a un 27%. Del mismo modo, si en 1990 el 92% pensaba que un niño necesita un hogar con ambos padres, hoy cae a un 75%. Por último, precisa el mismo estudio, estos cambios ocurren principalmente en el seno de las clases con mejor bienestar económico, educacional, especialmente los jóvenes. Esto significa que los porcentajes correspondientes a los temas tratados aumentan considerablemente en el seno de las capas medias, resultando éstas particularmente expresivas de la transformación cultural en curso. Luego, es en estos sectores medios en donde se manifiestan con más fuerza las inestabilidades asociadas a los cambios que acarrea el proceso de modernización, haciendo más claras allí las incertidumbres que están en la base del malestar con dicho proceso.

Gran parte de los cambios apuntados conducen a un aumento en la demanda de funciones que se espera cumpla la educación, vinculando así el malestar con el estado que muestra ésta última, a complejos problemas del llamado cambio cultural. De ahí que la educación reciba una presión social cada vez mayor para que ejerza una labor formativa, una función moral, porque a la escuela se le exige que compense la declinación que vienen experimentando las familias, las iglesias, además de los partidos políticos y el mismo Estado como instituciones moralizadoras.

La demanda de certidumbre

Los dilemas anotados remiten, en definitiva, a los grados de seguridad y certeza existentes en la población, o bien a sus déficit y, como tal a la incertidumbre. Se trata de una inseguridad socioeconómica y psicosocial. En parte se explica por el carácter y la orientación que asumen las transformaciones económicas e institucionales de las últimas décadas, y se manifiestan en lo que el PNUD apuntó como la existencia de una sociabilidad y comunicación deficitaria en la sociedad chilena[7]. Tiene que ver con la relevancia que alcanzan los sentimientos de pérdida de protección social ante la dirección que asume, por ejemplo, la transformación de los sistemas de salud y previsional, así como con las dificultades que se surgen en torno a la realización de oportunidades, y la forma en que éstas se expresan en ámbitos como la educación, el trabajo y el consumo. De ahí la impresión de que la seguridad humana resulta deficitaria en un Chile en pleno y acelerado proceso de modernización.

Los mecanismos de seguridad han de ofrecer protección básica contra las amenazas y permitir la realización de las oportunidades ofrecidas. En términos de la educación, en la medida en que juega un papel importante en la determinación de la condición social de las personas, siempre ha sido apreciada como canal de movilidad social. Tal vinculación entre nivel educacional y nivel socioeconómico la confirman análisis recientes. La educación representa simultáneamente la forma fundamental de socialización (junto con la familia) para integrar a todo individuo a la vida social. Es a través de la educación escolar que las personas aprenden a compartir cierta tradición cultural, particularmente el lenguaje y la historia nacional, cierta interpretación del mundo actual y expectativas similares de futuro, en fin, a compartir un "sentido común" y, por tanto, a desarrollar un sentimiento de arraigo y pertenencia.

En las últimas décadas se ha ampliado sostenidamente la cobertura del sistema educativo, pero ello no da cuenta del acceso muy desigual al sistema educativo. Ya en el momento de ingresar a la escuela, punto de partida y condicionante de la biografía posterior, no existe una igualdad de oportunidades. La desigualdad inicial se prolonga y refuerza en la medida en que aumenta el nivel educacional. Por otro lado, la desigualdad de oportunidades se refleja en la calidad del sistema educativo. Las mediciones que evalúan el rendimiento escolar muestran una marcada correlación entre nivel socioeconómico y rendimiento escolar. En fin, el sistema educacional no ofrece una igualdad de oportunidades.

Por otra parte, el trabajo ocupa un lugar fundamental en la sociedad chilena en cuanto condiciona no sólo el bienestar material sino igualmente el bienestar síquico y el universo cultural de la gente. Esa preponderancia radica en la importancia que tiene el trabajo productivo en la reproducción material de la sociedad y para el bienestar de las personas. Tener un empleo estable con ingresos adecuados permite

[7] PNUD, *op. cit.*

a los individuos valerse por sí solos. De ahí el papel primordial del trabajo para el bienestar psicosocial: influye en las posibilidades de autoestima, de autorrealización individual y, en general, condiciona las relaciones de confianza y sociabilidad que puedan desarrollar las personas. Es decir, el empleo procura no sólo ingresos sino también vínculos sociales. Más allá de su importancia económica el trabajo tiene, así, una enorme importancia en la configuración de la identidad colectiva, de los sentimientos de pertenencia y de participación de los individuos, en fin, de su integración en la vida social. Por eso el reconocimiento social del trabajo no se agota en la remuneración: atañe a la forma en que se organiza la sociedad.

Mientras que las oportunidades de empleo aumentan con el crecimiento económico, tal incremento no ha sido igual para los diversos sectores de la sociedad. Los grupos con menor capital social y cultural tienen también menores oportunidades de insertarse en un proceso de modernización que se apoya cada vez más en el conocimiento y la información. La mayor demanda de empleos calificados en una "sociedad de conocimiento" sugiere que la flexibilidad del empleo seguirá aumentando en el futuro, incrementando las oportunidades y los riesgos. En tal caso, el problema prioritario consistirá en la adaptación de las personas a una fuerte rotación del empleo.

En términos de ingresos, en los años noventa no sólo se recuperan los niveles anteriores, sino que tiene lugar una mejoría de los ingresos en todos los sectores sociales. Pero se mantienen grandes diferencias; en rigor se ahondan. Aparecen nuevos empleos que permiten un aumento de los ingresos, pero éstos quedan rezagados en relación con el crecimiento de los ingresos del país en su conjunto. La percepción de la distancia que separa los ingresos propios de los de otros sectores y la comparación de la situación propia con el crecimiento económico sostenido del país acentúan el sentimiento de injusticia de amplios grupos sociales. Ello remite a los problemas de ascenso social que son, tradicionalmente, un motivo de preocupación de los chilenos. La mayor flexibilidad del mercado laboral se acompaña de una mayor segmentación entre las categorías sociales. La movilidad resulta más bien horizontal (dentro de una misma categoría) que ascendente. Por otra parte, hay una importante disconformidad con los ingresos. A pesar de que todos los grupos sociales han visto un incremento de sus ingresos, la mayoría los considera insuficientes para solventar sus necesidades, especialmente de salud y previsión de vejez.

Dada la alta relación entre ingreso y educación, ello ha impregnado el sentido común, dando lugar a una creciente valoración de la educación y de la capacitación. De ahí que el malestar con la educación resulte también un malestar con la movilidad y la falta de equidad. En cambio, en el caso de los empresarios y ejecutivos, los ingresos parecen depender menos de la educación que de la experiencia y de otros factores como el acceso a activos fijos. En definitiva, los ingresos ya no se refieren a una escala institucional de remuneraciones y tienden a depender mucho más de la inserción en redes; dos personas con similar formación pueden tener muy distintos ingresos según su "valor" circunstancial en determinada coyuntura (ello denota una

pérdida de predictibilidad y, como tal, una fuente de inseguridad). En tales contextos, los ingresos suelen ser más altos, pero también más inestables. Es decir, la posición laboral y los ingresos devienen situaciones aleatorias que frecuentemente dependen más de factores externos que de méritos propios.

El impacto de éstas y otras transformaciones es potenciado por la celeridad de los cambios. Modernizaciones que en Europa maduraron a lo largo de décadas, generalmente amortiguadas por un tejido social sedimentado, se realizan en Chile en pocos años. La velocidad de las transformaciones exige procesos igualmente acelerados de aprendizaje y acomodo para aprovechar las nuevas oportunidades. La celeridad de los cambios, por otra parte, vuelve más difícil distinguir entre oportunidades sólidas y espurias. Todo ello en un contexto en el cual los mecanismos institucionales para la seguridad laboral tienen una efectividad restringida.

En suma, la rápida reorganización y tecnificación del trabajo aumenta las oportunidades y los riesgos. En el futuro, el mercado laboral seguramente estará marcado por una fuerte rotación. Habrá más oportunidades de empleo, particularmente para personas calificadas, pero el empleo será más inestable. El problema prioritario ya no es la estabilidad del empleo actual, sino el permanente proceso de reinserción en un mercado extraordinariamente móvil. El futuro aparece pues como algo incierto en un aspecto tan vital como lo representa el trabajo. Aun cuando tal dinámica no provoque necesariamente desempleo, suscita incertidumbre.

En este sentido, cabe interrogarse por el significado político que puedan tener los sentimientos de inseguridad, desamparo y desencanto que se aprecian en la sociedad. Ello apunta a los requerimientos que pesan sobre la democracia chilena; requerimientos culturales propiamente tales, pero capaces de afectar al propio sistema político. Tales requerimientos culturales actúan como un malestar con la política, en la medida en que, en la actualidad, los anhelos no encuentran un marco interpretativo, y por lo tanto, tras las crisis ideológicas recientes, se produce la ausencia de todo proyecto. Con ello, aunque fértil para el problema del orden, el sentimiento que subyace a la democracia actual es de desencanto. Mientras, la política, y el análisis de ésta, se centra en la dinámica institucional, la estrategia de los actores y los condicionamientos económicos sin considerar debidamente la experiencia diaria de la gente, sus miedos y sus deseos.

En la medida en que las organizaciones políticas, cada vez más especializadas (burocratizadas) y escindidas del quehacer diario de la gente común, ya no crean ni aseguran las identidades colectivas, éstas tienden a recomponerse al margen e incluso en oposición a las instituciones. Pero también decaen aquellos ámbitos de sociabilidad informal (como el barrio, el club de fútbol o la universidad) en que se compartían emociones y sueños, que se constituían referentes colectivos. Ello lleva a una escisión entre el ámbito cotidiano y la sociedad general. Una oposición entre "comunidad" (entendida en su connotación positiva de convivencia armónica, no destruida por la modernización) y la "sociedad" orientada por la racionalidad formal. El aspecto

más relevante de la vida cotidiana se vuelve, entonces, la búsqueda de las certezas más básicas. Esta escisión entre lo cotidiano/comunidad y política/sociedad está en el origen de la pérdida de seguridad que experimentan hoy los individuos.

La otra cara de la certidumbre es la inseguridad, y esta está asociada al miedo. En la alta visibilidad otorgada a la criminalidad (por sectores políticos, gobierno, medios de comunicación, etc.) hay un intento de objetivar el horror, proyectándolo para obtener aceptación del orden existente. Las encuestas oficiales son claras en establecer que, en Chile, las tasas de victimización resultan varias veces superiores a las de los países desarrollados y, en algunos delitos, aun más altas que las de países latinoamericanos, independientemente de que aumente o no la tasa real de delitos. Este año el asunto volvió a ser tema del espacio público. Los medios de comunicación mostraron profusamente el brutal asesinato Hans Pozo y la difícil vida que llevaba el joven. Del registro de la violencia desplegada principalmente en poblaciones populares a propósito del 11 de septiembre, se abrió una liviana disquisición acerca de los grupos anarquistas, o los neonazis criollos, discusión que se empalma con una serie de reportajes sobre los clanes que dominan en barrios populares de la capital. Historias de caciques locales, clanes y redes de narcotráfico servirán para agitar la inseguridad de la población, así como para relevar la inefectividad de las políticas oficiales y reclamar mano dura.

Como un símbolo de estos ghettos incontrolables se erige el sepelio masivo del mítico "Indio Juan", con una inédita exhibición del poderío de las pandillas armadas. Termina así por llamar la atención la medida en que se reivindica la delincuencia en forma abierta, como una forma legítima de obtener bienes o alcanzar mejorías relativas en la condición económica que por otras formas, legales, resulta vedado para amplios sectores populares. La violencia delictiva se instala ya sin culpa como una suerte de remedo en contra de los grados de iniquidad y ausencia de oportunidades a que la sociedad chilena actual condena a amplias capas de su población.

La inseguridad está ahí, pero los medios de comunicación masiva y la iniciativa gubernamental se esmeran en reducirla a la cuestión de la delincuencia, ignorando otras dimensiones, como aquellas que apunta el PNUD en términos de una "sociabilidad deficitaria", de la desconfianza entre los individuos, de lo endebles que resultan las relaciones sociales a partir de la desarticulación de muchas de las viejas estructuras sociales y formas de comunidad. Así, tanta proyección de la criminalidad, ignora que la inseguridad ciudadana no se resuelve por la vía de acatar disposiciones tecnocráticas. Más allá de su trivialización, ésta remite a la falta de certeza acerca de las normas de convivencia social, y ello no puede ser abordado como un asunto meramente técnico-administrativo. Es cierto que se produce una demanda de orden, pero todo no se reduce a ello.

El miedo explícito a la delincuencia no es más que un modo de expresar otros miedos silenciados: miedo no sólo a la muerte y a la miseria, sino también a la vida sin sentido, despojada de raíces, desprovista de futuro. Ello en la medida en que la

diversidad social no logra ser asumida como pluralidad, sino que es vivida como desintegración cada vez más insoportable. De ahí la pérdida de certidumbre, vinculada al desplome de diversos referentes colectivos. A tal clima de incertidumbre responde, entonces, tanto el autoritarismo como la democracia restringida, encarnando el deseo de orden frente a la amenaza del caos. Solicita la legitimación a cambio de procurar orden. El resultado es una sociedad vigilada.

La instrumentalización de los miedos es uno de los principales dispositivos de disciplinamiento social. Se trata de una estrategia de despolitización que no requiere medidas represivas, salvo para ejemplificar la ausencia de alternativas. Más allá de excesos que llevan a su instrumentalización prolongando rasgos autoritarios, la demanda de orden es indesmentible, y pesa sobre la estructuración de la nueva democracia chilena. Empero, no puede extremarse el campo de la racionalidad formal al punto de identificar la política racional con el cálculo de intereses (costos y beneficios); allí la mezcla de la tendencia a la secularización de la política y las herencias culturales autoritarias, se unen para precarizar la democracia. El punto es que el malestar con la política plantea el dilema de restablecer cuál es el campo de la política. En un contexto como el actual de vertiginosas mutaciones culturales, expresión de una crisis de identidad, ¿en qué medida contribuye esto entonces a generar una cultura política democrática? Al contrario, la crítica a la noción histórica de sujeto tiende a socavar las bases para repensar la política. Al identificar la lógica política con el mercado y el intercambio no puede plantearse el problema de identidad. Pero esta es una de las mayores tareas que enfrenta la cultura política democrática. De ahí la importancia de la cultura política: si no se logra desarrollar un nuevo horizonte de sentidos la institucionalidad democrática queda sin arraigo: una cáscara vacía. Es que, no hay que llegar al extremo del neoliberalismo, con su ofensiva ya no solamente contra la intervención estatal, sino contra la idea misma de la soberanía popular. Al cuestionar la construcción deliberada de la sociedad por sí misma no se cuestiona sólo a la democracia; se cuestiona toda la política moderna.

El "cierre social" de la elite y el misterio acerca de su talento

Pero la elite permanece ajena a estas preocupaciones y los dilemas de extensas franjas de la sociedad. A pesar de que el país no logra retomar la anhelada senda del crecimiento, las más grandes empresas gozaron este año de ganancias a tasas mucho más altas que la del crecimiento del país. Las elecciones en la Confederación de Producción y Comercio transcurren sin mayor novedad. Las disputas no pasan de ajustes internos que ratifican, sin sorpresa, el predominio de las líneas bancaria y minera dentro del empresariado. El cambio más relevante en los últimos años es la adopción de una línea pragmática, que lleva al empresariado a distanciarse de la figura de Pinochet y arribar a crecientes acuerdos con la Concertación, o más exactamente con su elite "transversal". La apertura de los directorios de sus empresas

a un selecto grupo de tecnócratas y figuras políticas de esa elite concertacionista, se suma al trabajo conjunto que emprenden en esferas internacionales para viabilizar acuerdos y alianzas con capitales externos.

Más allá de los ruidos, en política tampoco producen mayor cambio. Presenciamos la consumación de la alianza de la elite concertacionista y el muy empresarial Centro de Estudios Públicos (CEP), una suerte de "dirección intelectual y moral de la sociedad", para ponerlo en términos gramscianos, de cuyas oficinas han salido en los últimos años los diseños de gravitantes políticas públicas. La actual presidenta ha continuado el ritual de comentar y discutir en el poderoso centro con los grandes empresarios y sus técnicos cuanto plan de significación tiene el gobierno. Por otro lado, es precisamente el CEP, de la mano de Eliodoro Matte, quien jugó un papel central en la tarea de "educar a los empresarios para vivir en democracia", o sea, en el entendimiento con la elite concertacionista. Se consolidan así, al punto del rito, tales encuentros y su eficacia para cimentar una estrecha vinculación –y hasta cierto tránsito– entre la elite política y económica del país[8].

De otro lado –menos novedoso aun– se produce el retorno de los Larraínes a la cabeza de la derecha política, la misma que declara estar necesitada ¡de cambios!. Con tal objeto recurre a Hernán Larraín, la UDI, y a Carlos Larraín, RN, quienes ostentan tan conspicuo apellido que evoca nuestro pasado más rancio y oligárquico. Un ubicuo clan familiar desde hace tres siglos, que sobrevive a muchas fortunas, que precede a la organización misma del Estado-nación republicano, confirmando lo persistente que es esta familia. Desde la misma colonia hay Larraínes en todas las áreas de importancia: encomenderos, comerciantes, terratenientes, mayorazgos, poseedores de títulos y miembros de órdenes nobiliarias y militares, oidores, alcaldes, corregidores y sacerdotes. Un protagonismo que crece con la independencia, figurando como diputados, senadores, obispos, arzobispos, ministros y presidentes de la República, rectores de universidad, diplomáticos, junto a patrones de fundo, rentistas, comerciantes, directores de empresas y asociaciones gremiales, que atestiguan la importancia de llamarse Larraín.

Claro que no toda la elite resulta históricamente estática. A pesar de recomposiciones periódicas, la elite dirigente, por siglos, no varió en lo medular. Pero es cierto que esta situación colapsa con la reforma agraria de los años sesenta y setenta del siglo recién extinto, y el viejo patriciado señorial desaparece para siempre.

[8] El Informe del PNUD de 2004 presenta un detallado mapa de los vínculos existentes entre las distintas elites –económicas, políticas, culturales, etc.– y el carácter cerrado que estos adoptan. Véase PNUD, *El poder: ¿para qué y para quién?*, Informe de Desarrollo Humano en Chile, Santiago, 2004, parte 5, "La elite chilena y la difícil conducción del desarrollo". Allí se afirma que, entre las entidades que más propician el actual entramado de la elite chilena se encuentran –sin nombrar alguno en especial– los centros de investigación, confirmando su creciente funcionalidad para los objetivos de la elite, p. 200.

Se termina con la hacienda y el inquilinaje que antaño brindaban un aura de casta impenetrable, a menos que se aportara dinero, influencia política o solvencia profesional, los medios clásicos de ascenso del viejo Chile. Y resabios de esta antigua elite, claro, persisten. Apellidos rancios, "vinosos", aún suenan, como acabamos de ver.

Pero ello no puede desconocer los cambios que en la última etapa experimenta la elite chilena. Cambian las formas de hacerse y hacer visible la riqueza. En razón de que ésta posee ahora un acentuado componente financiero, se vuelve exponencial. Si antes, bajo códigos estamentales estrictos que valoraban más los privilegios que la mera cuantía de dinero a su haber, se requerían dos o tres generaciones para ser aceptado, hoy se puede ser multimillonario en menos de una década. Pero hay otras diferencias, por ejemplo en las formas del prestigio social. En el pasado, ser conspicuo suponía ser conocido por todo el mundo, en cambio, la riqueza actual es más anónima. Es que el actual no se equipara en espíritu nacional (oligárquico, por supuesto) al viejo patriciado. La nueva elite no se ha destacado por su manejo de la "cosa pública".

Para hacernos una idea de esta nueva realeza, se puede considerar que las fortunas sobre el millón de dólares –entre emergentes y consolidadas– abarcan hoy en Chile a unas 4 mil familias. De ellas, sólo 632 superan los 5 millones de dólares. Lo más relevante es que todos estos grupos han crecido aceleradamente en los últimos cinco años: los chilenos con 5 millones de dólares o más aumentan en un 65%, y los que superan el millón de dólares lo hacen en un 53%. Sólo el 0.09% de las familias chilenas –según un estudio del Boston Consulting Group– conforma la clase que puede acceder al superlujo. Las personas con alto patrimonio, en cambio, están en el 1% de la población con mayores ingresos, el que -según datos de la encuesta Casen- está conformado por 40 mil familias, aunque sus extremos resultan muy distantes el uno del otro. Una nueva casta que comenzó a surgir en los años noventa cuando el país alcanzó tasas de crecimiento del 7%. Muchas de ellas son riquezas que crecen en forma explosiva: mucho dinero en poco tiempo. El resto de los sectores de la sociedad también incrementó sus ingresos, pero en una medida mucho menor: un 20% salió de la pobreza oficialmente considerada, y los sectores medios aumentaron su ingreso promedio familiar –en términos reales de acuerdo al IPC 2003- de unos 510 mil pesos mensuales en 1990 a unos 710 mil en 2003. Es claro, pues, que no hay proporcionalidad entre dichas velocidades de aumento de los ingresos, o sea, en el modo en que se distribuyen los frutos del crecimiento económico.

Tan acentuado resulta el fenómeno que, comparaciones internacionales arrojan que pocos países en el mundo exhiben fortunas tan cambiantes como Chile. Los profundos cambios económicos, políticos y sociales que vive el país durante las últimas décadas han influido enormemente en los vaivenes de la riqueza y de quienes la detentan. Después de la reforma agraria, donde parte importante de la elite de ese entonces perdió su fuente de riqueza, surgieron después de 1973 nuevos grupos económicos, varios de los cuales colapsaron durante la recesión de los años ochenta.

Por ello, uno de las rasgos más llamativos de las actuales fortunas es la escasez de "plata vieja". Pese a que los millonarios son una tribu que floreció en la última década y media, Chile no es un país que, proporcionalmente, tenga muchos. Su signo es el de la extrema concentración del ingreso: Brasil y Chile son los países de la región donde más a crecido el número de millonarios en los últimos cinco años. Sólo entre 2004 y 2005 aumentó en un 20% el monto de la riqueza que administran los chilenos que tienen más de un millón de dólares.

De ahí que un corte de 10% de la población de mayores ingresos resulte aún demasiado grueso para perfilar a este sector. Una familia chilena en la que el marido gana 800 mil pesos y la esposa 400 mil y tiene al menos un hijo, se ubica inmediatamente en el 10% de mayores ingresos. Cohabita en dicho decil con los millonarios antes anotados, y hasta fortunas que superan los mil millones de dólares. Tal disparidad revela la alta heterogeneidad de ingresos que convive en el 10% más alto de la pirámide social chilena. En el 90% restante, según la encuesta Casen 2003, se congregan desde la pobreza extrema hasta sectores medios bajos. La verdadera riqueza en Chile está asentada en el 1% de la población, aunque éste también resulta aún relativamente heterogéneo. El ingreso a este corte de población se establece en torno a un ingreso familiar de 5.4 millones de pesos mensuales, el que si bien garantiza cierta holgura, no convierte necesariamente a sus integrantes en millonarios. Al comparar las cifras promedio actuales de este sector con las de 1990, se tiene que aumentó sus ingresos desde 6.6 millones a 10.2 millones mensuales. La conclusión relevante apunta a que este 1% de los chilenos ha aumentado su participación en los ingresos totales del país en los últimos años: si en 1990 se llevaba el 16.2% de los ingresos totales, en 2003 se empina por sobre el 19% de la torta nacional.

Como se sabe, la explosión de la tenencia de bienes en Chile ha sido sostenida y generalizada. Precisamente, uno de los mayores cambios de la sociedad chilena es que la tenencia de bienes dejó de ser un buen indicador para diferenciar a los grupos sociales. El consumo se ha expandido socialmente, con lo que muchos bienes perdieron su etiqueta de exclusividad. Coinciden en ello varias razones: el aumento del ingreso de los sectores medios, el ingreso de la mujer al mundo laboral y la masificación del crédito, entre otras. No obstante, la elite mantiene sus propios códigos de estatus que le permiten diferenciarse. Aunque la adquisición de bienes en los mercados de alto lujo podría ser la muestra más evidente de ello, según quienes estudian estas pautas, se mantienen ciertas constantes históricas, como el número de personas que trabajan alrededor de las tareas familiares y el lugar donde se estudia, se vive o se veranea. Es que, cuando el consumo se masifica, los grupos con más poder adquisitivo tratan de escaparse: si la educación superior se ha extendido, ahora lo que cuenta son los posgrados en las universidades más cotizadas en el extranjero.

Claro que, los criterios de admisión en las universidades locales preferidas por estas elites no necesitan idear favoritismos para privilegiar a los más ricos. Una persona que estudió en un colegio público y cuyo padre no es profesional parte con 200

puntos menos en la PSU. Por eso, gracias a la segmentación que establece el propio sistema de educación, la elite cuenta con una cómoda ventaja, al igual que antes, cuando mandaba la herencia o la familia. El problema está –como se vio este año– en que la falta de movilidad está resultando ser un dolor de cabeza para el gobierno. Los datos son claros en indicar que los ricos son cada vez más ricos, y si bien los pobres no aumentan, esas posibilidades "de surgir" que porta la promesa liberal no se cumplen. De ahí todo el movimiento a favor de la meritocracia –la cultura del mérito–, que contrasta con la aristocracia –la cultura de la cuna–. Un dilema que no tarda en apuntar a la educación como factor clave en la búsqueda de la mentada igualdad de oportunidades.

Pero, contrario a ello, existe toda una red de colegios privados que se encargan de encumbrar con efectividad –léase protección, aunque la palabra no sea del gusto de la ideología profesada– a los retoños de estas elites. Entre ellos, un lugar cimero lo ocupan los colegios del Opus Dei. Es ilustrativo de los mecanismos de constitución y cierre forjados por esta elite, ver cómo surge el fenómeno de los colegios de La Obra. Éstos, que son de gran calidad en términos de instrucción –Tabancura, Cordillera, Los Andes y Huelén-, se ubican habitualmente entre los primeros en los resultados Simce y PSU. Su universidad (de los Andes) es una de las más destacadas entre las privadas. De modo que no es extraño que por su calidad, tal como en los años cincuenta y sesenta ocurre con el Saint George's, San Ignacio y Verbo Divino, las elites chilenas comenzaran a llevar a sus hijos a educarse en ellos y, décadas más tarde, sus ex alumnos atestaran las gerencias y los directorios de las más grandes empresas situadas en el país.

Las razones de esta influencia del Opus Dei en la elite se remontan a la crisis política de los años sesenta, en la cual la iglesia católica jugó un papel muy particular. Desde el siglo XIX, la iglesia y buena parte de la elite operaban unidas desde el Partido Conservador. Juntas resistieron las leyes laicas, la educación estatal, la separación del Estado y la iglesia, el matrimonio civil, los cementerios laicos y tantas otras reyertas del Chile decimonónico. Y luego resistieron a los gobernantes liberales y los radicales. Fue una iglesia sumamente conservadora hasta fines del Concilio vaticano II. Entonces, esa iglesia desentendida de las encíclicas sociales, de pronto devino una iglesia progresista: reforma agraria, educación no segregada, trabajo en las poblaciones, etc.

Buena parte de la elite chilena se sintió abandonada, juzgada y expropiada por los mismos que antes habían sido sus aliados: una iglesia a favor de los empresarios en su lucha contra los movimientos populares. Y este cambio se reflejó rápidamente en sus colegios tradicionales –como recoge la película Machuca– que pasaron a ser mixtos. De relativamente segregados a integrados por la fuerza. Y en que una parte importante de los curas se casaron o se volvieron hacia la izquierda. La evolución del Saint George's es ilustrativa de esta crisis ideológica en el mundo elitario.

Entonces aparece un movimiento religioso que le ofrece a la elite empresarial todo lo que la nueva iglesia le quitaba: enseñanza de calidad, conservadora en lo valórico y neutra respecto a las luchas sociales. Admirador del trabajo bien hecho (el trabajo empresarial, por supuesto) y centrado en la vida sacramental y personal, más que en los "pecados sociales" y las culpas colectivas del sistema capitalista. Pero no sólo eso: la lucha por los derechos humanos de la iglesia chilena no fue acompañada por el Opus Dei. De modo que la elite que apoyó tan entusiastamente a la dictadura militar sintió que en este movimiento tenía mucha acogida y muy poca crítica. No había contradicción –ni leve– entre ser empresario y ser católico. Entre perseguir a la izquierda y la religiosidad. Entre querer ser rico y exitoso en los negocios y ser católico ejemplar. Tampoco entre, bajar costos, despedir empleados y comulgar todos los domingos. El dilema entre el nuevo catolicismo social y la vida empresarial quedaba así obsoleto.

Es que, entre todos los movimientos religiosos neoconservadores que llegan o surgen en Chile, el Opus Dei ganó la cima a las claras. Fue el primero en ofrecer sus servicios, con su efectivo modo de asumir el catolicismo para superar la crisis ideológica de las elites. Por eso goza del liderazgo en la elite nacional. Al tener personajes gravitantes en sus filas, muchos jóvenes vinculados a sus redes pueden ascender más rápido en sus vidas.

Cierta línea de la sociología, abocada a los aspectos relativos a la acción colectiva como factores explicativos de las divisiones en clases sociales, más que a factores como la propiedad sobre los medios de producción, comprende este proceso bajo la noción de cierre social. Como tal, la aplica a aquellos tipos de acción a los que recurren los grupos sociales para asegurarse los máximos beneficios posibles, limitando a otros el acceso a los recursos y oportunidades[9]. Ello considera la necesidad de designar ciertos atributos sociales o físicos como bases justificativas de tal exclusión, con la finalidad de monopolizar determinadas oportunidades, normalmente económicas. Su intención es siempre cerrar el acceso a oportunidades sociales y económicas. Las prácticas antes anotadas de la elite en Chile se corresponden con ello, contraviniendo las promesas que establece el discurso liberal divulgado. La monopolización no sólo las oportunidades sino del prestigio social como tal resulta indicativa de ello. Por esto, no ha de extrañar que la elite chilena resulte hoy es menos permeable y se defienda para que no entre más gente al grupo. Que se casen entre ellos y privilegien sus relaciones. Que se proteja a sí misma. Sus miembros se identifican y hay un poderoso instinto de autoconservación.

Empero, a instancias de esa misma elite, se divulgan las promesas liberales acerca de que los bienes escasos, como el poder, el prestigio o la propiedad, deben

[9] Véase Parkin, Frank, *Orden político y desigualdades de clase. Estratificación social de las sociedades capitalista y comunista*, Editorial Debate, Madrid, 1978.

distribuirse al compás del desempeño y del talento de los ciudadanos y no en base a características adscritas, como el origen familiar. Por eso, desde hace casi dos siglos, la escuela tiene un lugar preponderante entre las instituciones sociales. En la llamada modernidad la escuela y el ideal liberal van de la mano. A la mezcla de ambas cosas –igualdad de derechos y distribución de recursos en base al desempeño– se le denomina meritocracia. Un tipo de sociedad en la que los recursos se distribuyen según los logros obtenidos por cada uno de sus miembros. Pero la nuestra no parece una sociedad meritocrática. Y por eso el talento de nuestras elites, y sus abundantes virtudes, son un misterio. En vez de distribuir recursos escasos en base al mérito o al desempeño, se hace en base a cualidades adscritas como la cuna, las confianzas tejidas en los colegios, las redes familiares, el ascenso matrimonial, las similitudes construidas a la salida de la misa dominical, las adscripciones religiosas. Intervienen muchos criterios para distribuir bienes escasos y para decidir quién está por arriba y quién por debajo en la escala del prestigio y del poder. Pero el mérito – el desempeño sobre la base de la igualdad inicial- no se usa casi nada. Así, la voluntad y el esfuerzo personal se hacen irrelevantes.

Contrario a lo que reza la teoría de la justicia que subyace a estos ideales liberales, tenemos una educación que no es para nada igualitaria (nadie discute que los resultados del aprendizaje se distribuyen según el ingreso familiar). Por eso ocurre que tenemos una elite cuya inteligencia es un misterio (puesto que nunca ha sido puesta a prueba) y cuyas virtudes morales (fuera de su entusiasta participación en los ritos dominicales) nunca se ejercitaron del todo cuando el horror inundó al país.

De todo esto se desprende que, en definitiva, dados los ensimismados aires que capean sobre las elites, no aparece una voluntad de cambio con la cual afrontar los malestares que este año se han hecho presentes. Nuestra elite está en otra.

¿Más inercia tecnocrática frente a los conflictos sociales?

Pero aún pese al ensimismamiento de las elites, la actual es una etapa compelida de introducir transformaciones en la política, y no seguir bajo una inercia tecnocrática que evade los dilemas que han ido apareciendo. Es que la protesta estudiantil fue un golpe mayor no sólo al gobierno, sino también al sistema político. Las simpatías que despertó en el país dan cuenta de grandes falencias que están más allá del sistema educacional. Los parlamentarios se mostraron perplejos de la capacidad de los dirigentes escolares y varios se dejaron llevar por el oportunismo. Los jóvenes echaron al suelo la imagen de una juventud indiferente y apolítica. Han devuelto la política al frente de la democracia, postergada por el tecnocratismo y el sesgo conservador de éste.

La protesta estudiantil tensiona a la Concertación pues se confrontan dos maneras de entender la acción del gobierno: una mirada "técnica", con un recetario de *policies*,

posible de ser compartida por "expertos" de distintos bandos políticos. O una mirada política, en torno a un objetivo superior, capaz de distinguir a la Concertación de la derecha. La mirada técnica desconoce los conflictos de intereses que hay en la sociedad, mientras que la mirada política los reconoce y los busca regular por consenso o por la norma de la mayoría.

La discusión pública, cuando no resultó secuestrada por la movilización estudiantil, se centró buena parte del año en temas como qué hacer con los excedentes del cobre, si ahorrar, gastar, hasta prestar a otros países. Súbitamente se proyectó una imagen de ricos, de atesorar mucho más de lo que se pensaba, con lo que, supuestamente, las discusiones basadas en la idea de la escasez perdieron valor. Los medios de comunicación insistieron en que, a partir de ello, se desata una suerte de avalancha peticionista en torno a tal abundancia en las arcas fiscales. Donde ésta resulta claramente visible es en el sector de los trabajadores públicos, uno de los grupos de interés organizado, a diferencia de otros sectores de la sociedad. Aunque también ocurre en el sector privado, como la sonada huelga de los mineros de la mayor empresa privada del rubro cuprífero, Minera Escondida, que termina con desembolsos cuyos montos en bonos de término de conflicto encandilaron al resto de los trabajadores chilenos. Los gremios de trabajadores estatales presionaron duramente al gobierno. El Colegio de Profesores recurrió a paros, negociaciones y articulaciones con los jóvenes secundarios movilizados. A ello se sumaron los trabajadores fiscales de la ANEF, así como los gremios de los trabajadores de la salud, llegando la Confenats a sostener la protesta más dura y prolongada. Pero el gobierno no se apartó de su inercia tecnocrática.

Valga recordar aquí su origen. Este se remonta a la concepción que, cuando todavía no se apagaban los incendios del 11 de septiembre de 1973, Miguel Kast y otros cuadros de una nueva derecha entonces por surgir, impulsaron de manera resuelta al alero de un Pinochet que también afiataba aceleradamente su control sobre diversas esferas estatales y de las fuerzas armadas. Por aquél entonces se pensó en revertir la lógica mesocrática que había animado al gasto social por décadas de desarrollismo. Como se sabe, este último modelo privilegió a los sectores obreros y de burócratas públicos en detrimento de los más excluidos de la ciudad y el campo. Ahora, para Kast, despuntaba la oportunidad de girar en contra de ese patrón distributivo de carácter mesocrático, e impulsar una suerte de "pinochetismo popular" a partir de una concepción de gasto social focalizado en algunos de los sectores realmente más pobres.

Lo impresionante de esto no está en esa historia, que como tal tenía un objetivo político claro, sino en que dicha lógica de la gestión estatal se haya mantenido por más de tres lustros bajo los gobiernos de la Concertación. Tal ha sido el espíritu que ha regido sus políticas sociales, enmarcadas por la regla de fuego del monetarismo, que exige equilibrio fiscal a cualquier costo. Como tal, esta orientación determina el

sentido en que se reestructura la burocracia pública, la racionalidad que sostiene a la gestión pública y con ello, a los patrones de formación que siguen universidades e institutos para entrenar a los cuadros burocráticos de relevo. La medida en que ello incorpora una racionalidad propia de la gestión de empresas, es sólo una muestra más del acentuado carácter tecnocrático de los grupos que hoy desempeñan labores de gobierno.

Pero no sólo de la lógica tecnocrática no se apartó el gobierno. Tampoco se despegó de la lógica de la escolaridad de las tareas férreamente acotadas y con fechas fatales de finiquito. Mantiene el discurso y la oferta programática con una impronta "apolítica", "inconflictuada", preferentemente técnica. Lo que en sí es contradictorio con los anuncios de "cambio de tiempos". Si esa es la ambición, su implementación será conflictiva y requerirá de un gran protagonismo político. Pero sucede que el gobierno ha tenido dificultades para encontrar un eje de conducción.

Las autoridades tenían una evaluación que auguraba baja conflictividad política y social y bonanza económica, lo que les hacía prever un período calmo y apto para un gobierno "tareístico" y hacedor. Pero las cosas no han sido así. La demanda por un cambio de ciclo, y la fuente de conflictividades que de allí deriva, tiene su principal explicación y manifestación en la pérdida de legitimidad del "modelo chileno". La sociedad hace rato que identifica el "modelo" de una manera más amplia que la que cubren sus lindes económicos. La ciudadanía no juzga al "modelo" sólo por sus méritos o deméritos económicos, sino por su capacidad para responder a demandas que incluyen mejorías y expectativas en diversos planos. La consecuencia que esto tiene para la política es trascendente, ya que ésta se sostuvo en los tres últimos lustros sobre los requerimientos que emanaban de la transición y los apoyos que emergían de la legitimación del "modelo".

En la transición, la llamada gobernabilidad adquirió connotaciones excepcionales y subsumió otras dinámicas y lógicas intrínsecas de la política. Pero sin la transición como telón de fondo se entra a una etapa en donde la política tiende a "recuperar" su normalidad y dicha gobernabilidad pasa a ser una categoría que compite con otras. Si se comparte que la transición ya no es un cauce que gravite y si se comparte que el "modelo" enfrenta una crisis de legitimidad, sería consecuente coincidir que la política chilena está en una situación que la impele hacia procesos reconstructivos de gran magnitud. El escenario en que estará inmerso el gobierno estará caracterizado por una gran movilidad social y política, fuente originaria de conflictos.

El desborde de las demandas de los distintos gremios y grupos de presión durante el 2006 tiene su origen en los déficit de representación que muestran el sistema político y el espacio público configurado por un puñado reducido de grupos. Movimientos sociales como el de los "pingüino"s constituyen algo más que una manifestación de una coyuntura económica. Han puesto de relieve un encierro de la política oficial, producto de los términos en que se constituye a partir de la transición, lo que le impide dar respuestas efectivas a las demandas sociales que no se ven

representadas por la institucionalidad existente. La enorme cantidad de intereses que se dejaron fuera en los términos pactados de transición a la democracia, hoy pugnan por reconfigurar un sistema político que no es capaz de absorber y resolver sus demandas.

La presidenta Bachelet, por ser mujer, fue presentada por el instinto de supervivencia de la elite concertacionista como la encarnación de una novedad naciente. Pero en verdad, y al contrario, Bachelet no ha representado hasta ahora una renovación del mundo oficialista. Hondos malestares de vastos sectores de la sociedad con el modelo de sociedad vigente seguirán clamando por un cambio de rumbo. Ante este panorama, ¿qué ofrecerá el gobierno? ¿Más inercia tecnocrática frente a los conflictos sociales? El país espera esa definición.